



Exposición de motivos

Proyecto de Ley No __ de 2021 Cámara

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 325 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA Y SE EXPIDE EL REGIMEN ESPECIAL DE LA REGION METROPOLITANA BOGOTA - CUNDINAMARCA”

1. Introducción

La creación a nivel constitucional de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, mediante el Acto Legislativo N.º 02 de 2020, se justificó en la necesidad de mejorar los procesos de planificación del territorio e implementación de políticas públicas regionales que resuelvan temas prioritarios como movilidad, prestación de servicios públicos, protección del medio ambiente, ordenamiento del territorio, logística, disposición de recursos sólidos, entre otros; convirtiéndose en un instrumento que sirva para planear eficientemente la región a futuro y atender los retos que se presentan por la falta de integración histórica¹.

Precisamente, como uno de sus fundamentos, el proyecto de acto legislativo resaltó la construcción a nivel mundial de regiones y un ordenamiento metropolitano para generar políticas públicas coordinadas entre municipios, especialmente cuando se presentan situaciones de grandes aglomeraciones urbanas, y destacó los casos de la región metropolitana de Sao Paulo, también conocida como “Grande Sao Paulo”, y la región metropolitana de Londres, conocida como “Gran Londres”. Las regiones se proponen como respuesta a la necesidad de enfrentar de manera integral problemas que trascienden los límites administrativos de una ciudad o un municipio, y que no se han podido solucionar con visiones parciales y en entornos jurisdiccionales limitados².

El Acto Legislativo N.º 02 de 2020 estableció el marco jurídico constitucional para la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca. Además de crearla como entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial, consciente de la importancia de este tipo de instrumentos en los procesos de modernización y desarrollo económico y social de un país, se visualizó a la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca como el mecanismo que tendrá por objeto garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo.

¹ Exposición de motivos del Proyecto de Acto Legislativo N.º 182 de 2019 Cámara, por el cual se modifica el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones. Gaceta del Congreso N.º 772 del 22 de agosto de 2019, Cámara de Representantes.

² Entre otros: Hall, P. y Tewdwr-Jones M. (2020) *Urban and Regional Planning*. 6° Edition. London and New York. Routledge; Vinod Kumar, T.M. (Ed.) (2019) *Smart Metropolitan Regional Development. Economic and Spatial Design Strategies*. Singapore. Springer Nature Singapore; Klaesson J., Johansson B. y Karlsson C. (2013) *Metropolitan Regions. Knowledge Infrastructures of the Global Economy*. London-New York. Springer; Bazzanella, L., Caneparo L., Corsico F., y Roccasalva G. (2012) *The Future of Cities and Regions. Simulation, Scenario and Visioning, Governance and Scale*. London-New York. Springer.

La propuesta normativa que se presenta a consideración del honorable Congreso de la República busca desarrollar la Ley Orgánica que definirá el funcionamiento de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, dispuesta en el párrafo transitorio 2 del artículo 1° del Acto Legislativo N.º 02 de 2020 y que en todo caso deberá atender las siguientes reglas y asuntos:

- “1. Para su trámite, el Congreso de la República promoverá la participación ciudadana y de los entes territoriales interesados.*
- 2. El procedimiento y las condiciones para la asociación de los municipios a la Región Metropolitana.*
- 3. El grado de autonomía de la región Metropolitana.*
- 4. El Consejo Regional será su máximo órgano de gobierno y estará conformado por el Alcalde Mayor de Bogotá, los Alcaldes de los municipios de Cundinamarca que se asocien y el Gobernador de Cundinamarca.*
- 5. Habrá un sistema de toma de decisiones que promueva el consenso. No se contemplará la figura de municipio núcleo como estructura organizacional ni habrá lugar al derecho al veto. Ninguna decisión sobre los temas que defina la Región Metropolitana podrá ser tomada por una sola de las entidades territoriales asociadas. Para las decisiones referentes al nombramiento y retiro del Director, y los gastos y las inversiones de la región Metropolitana, se requerirá la aceptación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.*
- 6. Se establecerán los parámetros de identificación de hechos metropolitanos, los mecanismos de financiación, la estructura administrativa del Consejo Regional, sus funciones, la secretaría técnica, los mecanismos de participación ciudadana y la transferencia de competencias de la nación.*
- 7. La región Metropolitana no modifica el régimen de financiación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), ni los municipios que componen su jurisdicción.*
- 8. En todo caso el control político de las decisiones de la región Metropolitana lo ejercerán el Concejo Distrital, los Concejos Municipales y la Asamblea Departamental”.*

Este proyecto de ley orgánica es una oportunidad única para que Colombia avance en la adecuada planeación de Bogotá y los municipios de Cundinamarca con un enfoque regional, buscando aumentar su productividad y competitividad, generar mayores oportunidades de empleo, asegurar que el desarrollo sea sostenible en términos ambientales, económicos y sociales y construir mayor cohesión social que contribuya a mejorar la gobernanza del territorio, con el fin de que toda la población tenga un acceso equitativo a los servicios sociales para su bienestar y desarrollo, con la mejor garantía de protección y goce efectivo de los derechos fundamentales de sus habitantes.

2. Antecedentes de la integración regional en la Región Bogotá – Cundinamarca

Las múltiples interacciones y relaciones entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca son de vital importancia estratégica para la región metropolitana, así como para todo el país. Para abordarlas se requieren soluciones integrales, concertadas y efectivas que impliquen la articulación entre los diferentes entes territoriales, pero sobre todo una institucionalidad que garantice reglas de juego claras y continuidad en las decisiones, la cual se garantiza con el articulado propuesto para el funcionamiento de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.

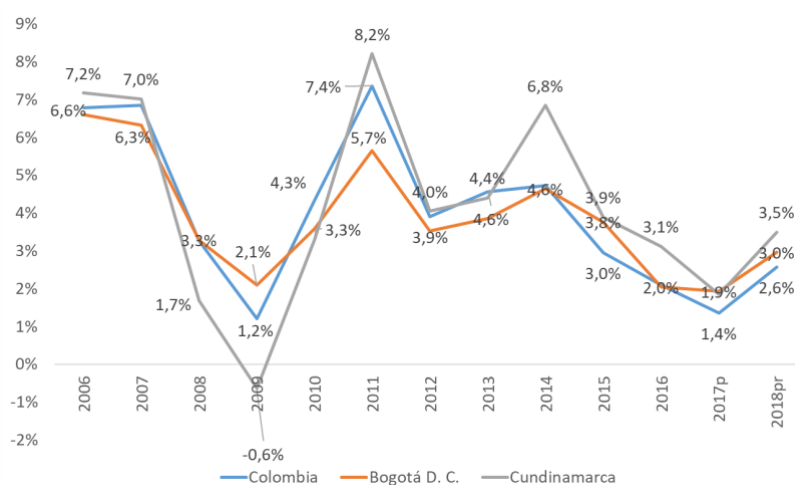
2.1. Importancia estratégica Bogotá-Cundinamarca

La Región Bogotá Cundinamarca se caracteriza por ser el principal centro económico, poblacional y de trabajo del país. Según el censo nacional del 2018, la población de Bogotá es de 7.412.566

habitantes y la de Cundinamarca a 2.919.060 habitantes³, superando los 10 millones de habitantes, lo que representa el 22% del total de la población nacional.

Bogotá-Cundinamarca es la región económica más fuerte del país con un Producto Interno Bruto (PIB) de USD 104.511 millones, es decir, representa el 31,6% del PIB de Colombia (Bogotá con el 25,6% y Cundinamarca el 5,97%). Superior al aporte de Antioquia (14.5 %), Valle (9.7 %) y Santander (6.5 %).

La economía de esta región ha crecido en los últimos cinco años al 3,6% promedio anual, por encima del comportamiento nacional.



Fuente: Estrategia de competitividad para Cundinamarca. CID. Elaboración propia con base en cuentas nacionales.

El tamaño de la economía de Bogotá y Cundinamarca de US\$ 10,748 millones es superior a economías de países de Centro América y del Caribe, como República Dominicana US\$7.915, Guatemala US\$4.754 y es ligeramente menor a la Panamá (US\$15.642) y la de Costa Rica (US\$11.968).⁴

La estructura productiva del Departamento está centrada principalmente en industria manufacturera con una participación en el PIB departamental del 24,08%, seguido de la agricultura con un 16,21%. Las provincias que mayor aportan a la economía del Departamento son Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha.

Por su parte, Bogotá, aunque es una economía diversificada, el 56,3% corresponde al sector servicios y el 19,6% a comercio.

La región cuenta con 530.000 empresas que representan un 34% de las empresas de Colombia. Anualmente se crean más de 65.000 empresas en su mayoría en los sectores productivos de servicios.⁵

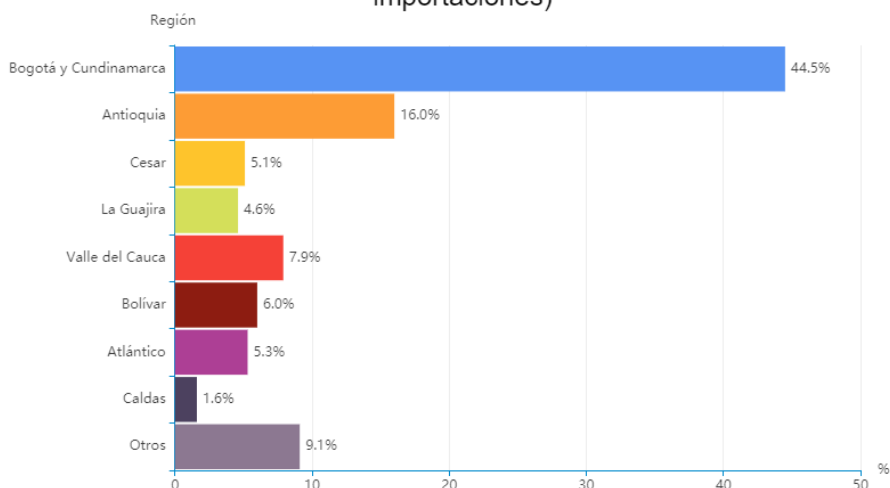
³ Dane. Censo Nacional de Población. 2018

⁴ Estrategia de Competitividad de Cundinamarca. Secretaría de Desarrollo Económico de Cundinamarca. CID. 2019. Análisis con base DANE- PIB total por departamento (2018-preliminar-PIB-total-por-departamento); World Bank Open Data; dolar.wilkinsonpc.com.

⁵ Fuente Cámara de Comercio de Bogotá. Observatorio de la Región Bogotá Cundinamarca. 2019.

Bogotá - Cundinamarca es la región más importante en el comercio exterior de bienes de Colombia, con el 44% de las exportaciones nacionales.

Participación de las regiones en el comercio exterior (exportaciones + importaciones)



Fuente: DANE. Comercio internacional 2019.

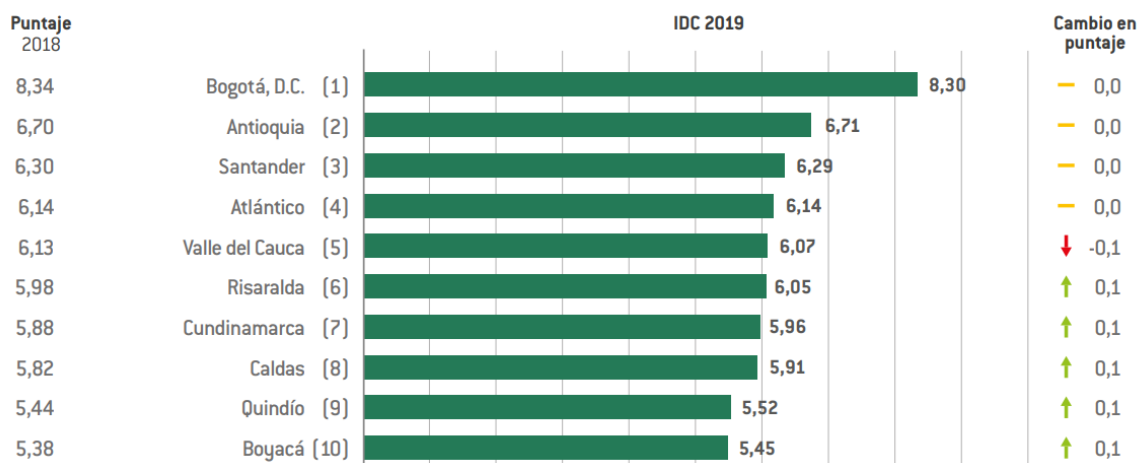
Tradicionalmente, el valor de las exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca en su mayoría han sido productos industriales (alrededor del 70%), principalmente productos químicos, vehículos, productos plásticos y maquinaria y equipo. Las exportaciones de productos agrícolas son la segunda actividad más importante, en especial la floricultura. Los productos de la minería más representativos en las exportaciones son los de carbón, hulla y minerales no metálicos.

La evolución de las importaciones y exportaciones de Cundinamarca muestra una balanza comercial deficitaria. Los cultivos de flores y la fabricación de productos de hornos de coque representan cerca del 58% de las exportaciones del departamento.

En la medición del 2019 del Índice de Competitividad⁶, Bogotá se ubica en el primer lugar con una calificación de 8,30, mientras que en 2018 obtuvo una calificación de 8,34. Por su parte, Cundinamarca ocupa el séptimo lugar con una calificación de 5,96, lo que representa un aumento frente al puntaje de 5,88 obtenido en el 2018. A pesar del incremento registrado, el departamento continúa en el puesto siete entre los 32 departamentos, por debajo de Bogotá, Antioquia, Santander, Atlántico, Valle del Cauca y Risaralda, presentando rezagos persistentes en innovación y dinámica empresarial, salud e infraestructura.

⁶ Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2019. Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario.

Ranking de Competitividad

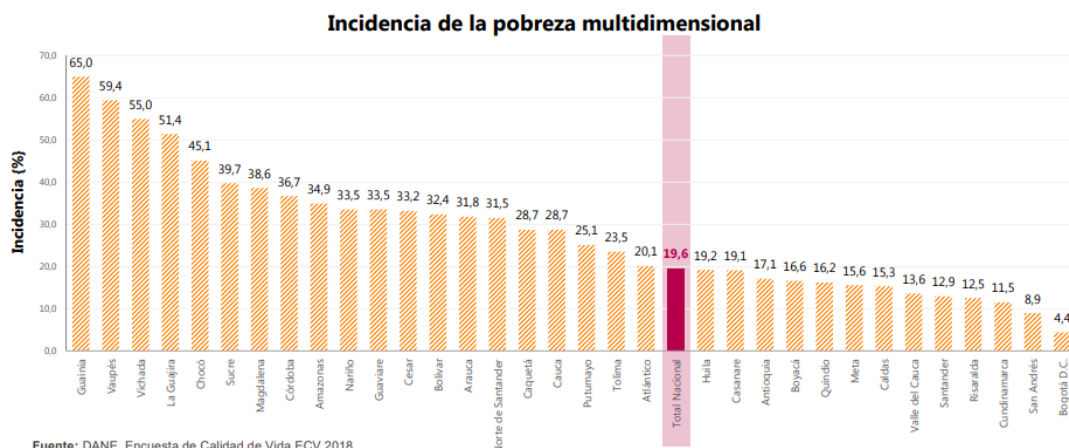


Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario.

Cundinamarca obtiene la calificación más alta (94,04) en el pilar de sofisticación y diversificación que hace parte del factor de competitividad denominado ecosistema innovador. La calificación más baja es en innovación y dinámica empresarial con una calificación de 3,22.

En Bogotá, los índices más bajos se encuentran en salud (6,87) sostenibilidad ambiental (6,98) y los mejores en el sistema financiero (100), sofisticación y diversificación (9,70) e innovación y dinámica empresarial (9,75).

En cuanto a las condiciones sociales, Bogotá y Cundinamarca hacen parte de los territorios con menor pobreza, siendo Bogotá el primero, seguido de San Andrés y, en tercer lugar, Cundinamarca con un índice de 11,5%. El promedio nacional es 19.6% y en Bogotá es del 4.4%.⁷



En términos de población, de acuerdo con los últimos tres censos realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (1993, 2005 y 2018), la población del país, y en

⁷ Dane. Encuesta de Calidad de Vida 2018.

particular la de Cundinamarca, ha aumentado en el tiempo. En 2018, Colombia registró 48 millones de habitantes y Cundinamarca alcanzó una cifra de 2.9 millones, siendo la cuarta entidad territorial más poblada del país después de Bogotá (7,4 millones), Antioquia (6,4 millones) y Valle (4,5 millones).

La población de Cundinamarca ha presentado una tendencia al crecimiento en el periodo 1993-2018, pasando de 1,8 millones de habitantes en 1993 a 2,9 millones en 2018. Además, la tasa de crecimiento poblacional fue positiva en el conjunto de municipios, pero con una desaceleración de largo plazo en el crecimiento poblacional agregado que presentó una variación promedio anual simple en el periodo 1993 a 2018 de 2.16%. Además, los municipios que se agrupan en las provincias de Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha presentan una tendencia de crecimiento más intensa que el resto de los municipios del Departamento. En siete municipios de los 116 del Departamento (Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Zipaquirá, Chía, Mosquera y Madrid) se concentra el 50% de la población de Cundinamarca.

Algunas de las relaciones supramunicipales o interjurisdiccionales que se presentan en Bogotá, Cundinamarca y los municipios son de índole urbana, funcional, ambiental, social, etc., y se presentan en el entorno cercano al Distrito Capital, mientras que otras relaciones se dan en un ámbito más extenso que incluye varios municipios del Departamento.

Bogotá y sus municipios cercanos presentan unas dinámicas funcionales intensas, y algunas de las problemáticas y vínculos supramunicipales más sensibles exceden el ámbito de la Sabana.

La movilidad es uno de los factores que evidencia las dinámicas intensas entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca. De acuerdo con la Encuesta de Movilidad (2019), 500 mil viajes diarios ingresan a Bogotá desde los 18 municipios del área de influencia, con Soacha ocupando el primer lugar de la relación funcional de conmutación al representar el 51% de los viajes. Con un 28%, se evidencia como modo principal de transporte intermunicipal al sistema de Transmilenio (BRT), seguido del automóvil con un 14% y el bus intermunicipal con un 10,5%. Mientras en Bogotá el tiempo promedio de recorrido, en todos los modos, es 51.9 minutos por trayecto, la duración promedio desde los municipios circunvecinos se encuentra entre 72 y 116 minutos.

Según datos de la Encuesta de Movilidad de 2019, para Bogotá y 18 municipios, mientras en Bogotá el costo promedio de viaje de ida y vuelta, al interior de la ciudad, se encuentra entre \$4.800 y \$5.000, al igual que el costo de viaje desde y hasta Soacha, para los municipios de la Sabana los costos promedio de viaje de ida y vuelta a Bogotá se encuentran en un rango entre \$5.000 a \$6.500 para algunos municipios vecinos (Chía, Cota, Funza y Mosquera), hasta llegar a entre \$8.500 y \$10.500 para otros municipios alejados (Zipaquirá, Gachancipá, Sopó), y entre \$10.500 y \$15.000 para el caso de Bojacá. Estas cifras evidencian una inequidad en cuanto al costo del transporte entre Bogotá y los municipios vecinos.

Otro de los elementos que refuerza la relación entre Bogotá y Cundinamarca es el abastecimiento y seguridad alimentaria. De hecho, la operación de abastecimiento de alimentos de la ciudad de Bogotá es altamente dependiente de los departamentos de la Región Central. En 2019 ingresaron a la ciudad 2.366.319 toneladas de alimentos, de los cuales el 76,3% proviene de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta y Huila, siendo Cundinamarca el primer abastecedor con 987.703 toneladas, equivalentes al 41,74% de los ingresos registrados para la ciudad.⁸

De las 987.703 toneladas aportadas por el departamento de Cundinamarca en 2019, 830 mil toneladas se distribuyen en 20 productos. Esto demuestra que el departamento no solamente es el más relevante desde el punto de vista de volúmenes de abastecimiento para Bogotá, sino que aporta

⁸ Observatorio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. 2019.

gran variedad de productos a la canasta alimentaria de la ciudad, debido a sus bondades climatológicas que aseguran una oferta permanente y diversa.

En materia de servicios públicos domiciliarios, el servicio público de acueducto es prestado por 162 prestadores en 113 municipios del departamento de Cundinamarca. De estos, 12 prestan en más de un municipio de Cundinamarca y atienden a 2.838.739 suscriptores y, de este total, el 80% son atendidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá⁹.

Otro de los asuntos que claramente trasciende la escala municipal y distrital es el fenómeno delictivo y de afectación a la convivencia. Análisis realizados por las Secretarías de Seguridad de Bogotá y de Gobierno de Cundinamarca, dentro de la estrategia conjunta Región Corazón, confirman la problemática regional. Las cifras comparativas de comparendos entre 2019 y 2020 del Registro Nacional de Medidas Correctivas a 2020, muestran un bajo cumplimiento de las normas de convivencia en las localidades de borde. Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy son las localidades en las se presentó un aumento mayor, concretando el 69% de las nuevas contravenciones en 2020 en Bogotá (con 9.466, 5.092, 4.645 casos nuevos respectivamente), principalmente por no cumplimiento las medidas de aislamiento social implementadas durante la pandemia.

En cuanto a los delitos de alto impacto, los datos abiertos del SIEDCO de la DIJIN-PONAL a 2020 muestran que el mayor volumen de reportes se concentra en el Distrito y los municipios cercanos. De los 92.828 hurtos a personas en Bogotá y Cundinamarca en 2020, 81.588 se reportaron en Bogotá, seguido de Soacha con 3.933, Chía con 788 y Mosquera con 718. En otros delitos, aunque hay una importante concentración en Bogotá y la Sabana, la situación es más diversa. En materia de homicidios, luego de Bogotá con 1.026 reportes, se encuentran Soacha con 153, Girardot con 28, Fusagasugá y Mosquera con 14, Zipaquirá con 11, Madrid con nueve y Sibate con seis.

Una de las dinámicas más contundentes es el proceso de urbanización de la Sabana, razón por la cual se adelantó el Estudio de Crecimiento y Evolución de la Huella Urbana para 20 municipios de Cundinamarca, de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y la Secretaría de Planeación de Cundinamarca. Este estudio tuvo el objetivo de identificar y caracterizar las dinámicas físicas y económicas de crecimiento y concentración, bajo las tendencias pasadas, presentes y futuras, con el fin de servir como herramienta técnica de apoyo a los entes territoriales, para articular y direccionar los esfuerzos en el planeamiento de sus políticas de crecimiento y desarrollo.

En cuanto al proceso de ocupación de Bogotá y 20 municipios, el estudio de Huella Urbana¹⁰ señala que en Bogotá la huella continua es de 34.612 hectáreas y la dispersa es de 1.424 hectáreas, mientras que en los 20 municipios la huella dispersa es de 12.386 hectáreas y la continua de 8.948 hectáreas. Los municipios que tienen una mayor huella dispersa son La Calera, Chía y Sopó en un uso residencial.

El estudio concluye que se ha presentado un desplazamiento de actividades económicas de Bogotá a los municipios de borde, con la formación de zonas francas en Mosquera, Gachancipá, Tocancipá, Cota, Facatativá, Funza y Soacha. Igualmente, señala que entre 2010 y 2016 se han ocupado 1.500 hectáreas de espacios protegidos y 1.900 hectáreas de suelo de alta capacidad agrológica.

Así mismo, el estudio hace una serie de recomendaciones relacionadas con la necesidad de contar con una autoridad de alcance regional que defina las vocaciones municipales, un sistema de movilidad integrado, una plataforma integrada de información georreferenciada, el desarrollo de una

⁹ Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 2019

¹⁰ Secretarías de Planeación de Bogotá y Cundinamarca. Estudio del Crecimiento y evolución de Huella Urbana de Bogotá Región. Idom. 2019.

red de centralidades regionales, el establecimiento de zonas con desarrollos condicionados a la justificación de demanda. El estudio señala que *“la consolidación de un territorio sostenible y competitivo es dependiente de una planificación coordinada del uso del suelo, la movilidad y el transporte, los servicios públicos y las áreas de actividad económica entre los municipios de la región”*¹¹.

Finalmente, es evidente que las relaciones ambientales no están confinadas a los límites administrativos. La cuenca del río Bogotá, que involucra a 46 municipios y al Distrito Capital, determina la necesidad de gestionar de manera articulada la protección y recuperación del recurso hídrico, en especial del río. Además, la región aprovecha servicios ambientales que prestan ecosistemas claves para la gestión del agua, como los páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza, Rabanal, entre otros. De las 459.690 hectáreas de áreas protegidas nacionales y regionales incluidas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, las más extensas son: el Parque Nacional Natural Sumapaz, que está presente en cinco municipios (Gutiérrez, Arbeláez, Pasca, San Bernardo, Cabrera) y el Distrito; la Reserva de la Cuenca Alta del río Bogotá que cubre parcialmente 27 municipios (Soacha, Sibaté, Bojacá, Mosquera, Madrid, Zipacón, Facatativá, Sasaima, Subachoque, Tabio, Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Nemocón, Suesca, Cucunubá, Villapinzón, Chocontá, Sesquillé, Guatavita, Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Guasca, La Calera) y Bogotá; y el Parque Nacional Natural Chingaza, que se extiende sobre áreas de los municipios de Medina, Gachalá, Fómeque, Junín, Guasca y Choachí, y que soporta el sistema Chingaza.

2.2. Procesos e iniciativas de integración regional

Cundinamarca, Bogotá y los municipios del departamento han puesto en marcha esfuerzos institucionales para el desarrollo de proyectos de interés común. A continuación, se señalan tanto las iniciativas de integración regional, así como los intentos fallidos de conformación de un área metropolitana, lo que sustentó la necesidad de crear una nueva figura como la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

El natural crecimiento y desarrollo de los asentamientos urbanos llevó a que las múltiples y evidentes relaciones e interdependencias entre Bogotá y los municipios circunvecinos se reconocieran con el artículo 1° del Acto Legislativo N.º 1 de 1945, el cual modificó el artículo 5.º de la Constitución Política de 1886, quedando el segundo inciso así:

“(…) La ciudad de Bogotá, capital de la República, será organizada como un Distrito especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. La ley podrá agregar otro u otros Municipios circunvecinos al territorio de la capital de la República, siempre que sea solicitada la anexión por las tres cuartas partes de los concejales del respectivo Municipio”.

Esta norma constitucional solo vino a tener desarrollo hasta el Decreto Ley 3463 de 1954, que facultó al entonces Consejo Administrativo de Cundinamarca para fijar los límites del municipio de Bogotá, *“pudiendo suprimir municipios, agregar o segregarse los términos municipales que le parezcan necesarios para el mejor desarrollo urbano de la ciudad capital”*¹². Conforme a lo anterior, el Decreto 3640 de 1954¹³ organizó Bogotá como un Distrito Especial y le anexó los municipios de Bosa,

¹¹ Ibidem

¹² Decisión que se concretó con la Ordenanza número 7 de 1954.

¹³ Expedido en uso de sus atribuciones legales y de las especiales que le confiere el artículo 121 de la Constitución, sobre estado de excepción.

Usaquén, Engativá, Suba, Fontibón y Usme¹⁴. Estos decretos se incorporaron al ordenamiento jurídico por remisión en la Ley 2ª de 1958¹⁵ y posteriormente adquirieron fuerza de ley con su adopción por la Ley 141 de 1961.

Precisamente, la definición de una figura institucional para la Región se vio obstaculizada por una histórica prevención, que tiene sus orígenes en este Decreto 3640 de 1954, en cuanto anexó a Bogotá los municipios definidos por el Consejo Administrativo de Cundinamarca.

En atención a que el Decreto 1333 de 1986, por el cual se expide el código de régimen municipal, les otorgó a los municipios la capacidad de asociarse para la prestación de servicios públicos y el desarrollo de obras de interés común, en 1990, mediante la Ordenanza 024 del 28 de noviembre, se creó la Asociación de Municipios de Sabana Centro (Asocentro), única asociación de municipios que actualmente existe en Cundinamarca de manera formal. El objetivo de esta entidad administrativa descentralizada es impulsar el trabajo articulado de los once municipios que conforman la provincia de Sabana Centro (Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá).¹⁶ Desde su creación, Asocentro ha liderado acciones relacionadas con temas como el turismo, el aumento de la productividad, la gestión de residuos sólidos, entre otros, orientados al desarrollo integral y sostenible de la provincia.

De otra parte, a finales de la década de los noventa, a partir de la mesa de concertación instalada entre Bogotá y Cundinamarca se trabajó en la conformación de un área metropolitana con alrededor de 20 municipios. Sin embargo, debido a la diferencia en varios temas, solamente los municipios de Soacha, Funza, Mosquera y Madrid firmaron, en 1999, una carta de compromiso que contemplaba, además de la creación del área metropolitana, la realización de estudios sobre transporte público, gestión de tráfico, servicios públicos, ordenamiento territorial y la redacción concertada de los Planes de Ordenamiento Territorial, entre otros temas¹⁷.

Este proyecto de Área Metropolitana no se concretó debido a que la Registraduría Nacional en el año 2000 no autorizó la realización de la consulta popular, con el argumento de que no se había expedido aún la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 319 de la Constitución, debía definir las características de ejecución de las consultas populares para la creación de nuevas áreas metropolitanas. Adicionalmente, porque no se había organizado la consulta popular, ni la consulta al Concejo de Bogotá y los concejos de los demás municipios.

Sin embargo, ante la imperiosa necesidad de contar con un enfoque regional, en el año 2001 se creó la Mesa de Planificación Regional como una instancia de cooperación interinstitucional entre Cundinamarca y Bogotá, con la participación del sector privado regional, la academia, la cooperación internacional y la sociedad civil, desde la cual se abordaron temas como la construcción de una visión compartida de largo plazo, el estudio de escenarios referenciales de desarrollo y ocupación del territorio, y la identificación y gestión de una agenda de proyectos comunes regionales.

En el 2002, se conformó el Consejo Regional de Competitividad, instancia pública privada con la misión de formular y desarrollar la visión económica regional de largo plazo, con el fin de que la región fuera una de las primeras de Latinoamérica por su calidad de vida. De este trabajo, se resalta

¹⁴ El Decreto 3640 de 1954 dispuso: *“Artículo tercero. El territorio del Distrito Especial de Bogotá será el del actual Municipio de Bogotá, adicionado con el de los Municipios circunvecinos, de acuerdo con la Ordenanza número 7 del Consejo Administrativo de Cundinamarca”*.

¹⁵ Recientemente derogada por obsolescencia con el artículo 3° de la Ley 2085 de 2021.

¹⁶ <http://www.asocentro.gov.co/entidad/nuestra-entidad>

¹⁷ El recuento de los antecedentes de integración está basado en el artículo *“La Región urbana de Bogotá de cara al siglo XXI”*. Gouëset, Vincent. Hacer metrópoli. Universidad Externado de Colombia. 2005.

la formulación y ejecución del Plan de Competitividad Regional, la Agenda Interna para Productividad y Competitividad de la Región Capital y la formulación del Plan Estratégico Exportador Regional (PEER). En el año 2007, cuando el Gobierno Nacional creó el Sistema Nacional de Competitividad, el Consejo se transformó en la Comisión Regional de Competitividad, que en la actualidad lidera la Estrategia de Especialización Inteligente para la Región. En virtud de lo previsto en el Decreto Nacional 1651 de 2019, mediante Decreto 217 del 02 de junio de 2021, la Gobernación de Cundinamarca estableció la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Bogotá D.C. – Cundinamarca y, por su parte, el Distrito Capital mediante el Decreto 203 del 9 de junio de 2020, reguló la participación del Distrito Capital en la Comisión.

Aunque la Mesa de Planificación Regional contribuyó al entendimiento de la necesidad de una visión conjunta para la Región, dado que no tenía carácter vinculante la ejecución de las acciones propuestas, dependía de la voluntad de los gobernantes. Por su parte, la Comisión Regional de Competitividad es un espacio de articulación público-privada relacionado con la competitividad de la Región, pero es insuficiente para la toma de decisiones en varias materias y la ejecución conjunta de proyectos de inversión.

En el 2008, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca suscribieron una Agenda Común con 32 temas estratégicos y 35 proyectos de alcance regional para el desarrollo de acciones e iniciativas de mediano y largo plazo que posicionaran a Cundinamarca y Bogotá, como una de las principales regiones de Latinoamérica. En diciembre de ese año se firmó un convenio interinstitucional para la conformación de la Región Capital en seis áreas programáticas: desarrollo institucional, competitividad y desarrollo socioeconómico, seguridad y convivencia, sostenibilidad ambiental, hábitat y servicios públicos, y movilidad para la integración.

En el 2012, se adelantó un segundo intento orientado a la conformación de un área metropolitana entre Bogotá y Soacha. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 128 de 1994, se radicó la iniciativa ante la Registraduría Nacional, en la que se solicitó establecer una fecha para la realización de la consulta popular que autorizaría en ambos territorios la creación de la nueva figura. No obstante, el Congreso de la República expidió la Ley 1625 de 2013, que modificó el Régimen de Áreas Metropolitanas y determinó que Bogotá debía contar con una ley específica, que *“definirá las reglas especiales a las que se sujetaría la conformación de un Área Metropolitana entre Bogotá y los municipios colindantes del departamento de Cundinamarca”*. (Artículo 39, Ley 1625 de 2013).

Con este cambio normativo, el proyecto de Área Metropolitana Bogotá – Soacha no se pudo concretar. Ante la demanda de inexecutable presentada contra los artículos 1 y 39 de la Ley 1625 de 2013, que alegaba la violación del derecho de Bogotá a integrarse con los municipios conurbados y la igualdad frente al resto de entidades territoriales de conformar un área metropolitana, la Corte Constitucional, en Sentencia C-226 de 2014, declaró exequibles los mencionados artículos, resaltando que no se estaba violando ninguno de los derechos alegados y que los artículos en cuestión ponían de presente la condición especial del Distrito Capital y de sus relaciones con los municipios de Cundinamarca, lo cual requería un desarrollo legal particular.

En el año 2014, se radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley N.º 110 de 2014 Senado, *“Por medio de la cual se establece el régimen político, administrativo y fiscal especial para la conformación del Área Metropolitana entre Bogotá Distrito Capital y el municipio de Soacha Cundinamarca”*, el cual no tuvo ponencia y por lo tanto no surtió primer debate.

Con fundamento en la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que en su artículo 30 creó la nueva figura de Región Administrativa y de Planificación como *“entidades conformadas por dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, cuya finalidad está orientada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad”*, se constituyó la RAPE – Región Central por medio del convenio 1676 de 2014, integrada por los departamentos de Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima y el Distrito Capital. Cinco años más tarde se vinculó el departamento del Huila.

Este convenio establece que las partes constituyen la RAPE-Región Central con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna de los servicios a su cargo, así como el desarrollo económico y social, la inversión, la competitividad del territorio objeto de su competencia y el bienestar de sus habitantes”.

Dentro de sus funciones se encuentran reglamentar y declarar los hechos regionales que delimiten el ámbito de intervención de la entidad; ejercer autoridad administrativa en la escala regional, en relación con los asuntos de su competencia y diseñar, adoptar, ejecutar, monitorear, evaluar y rendir cuentas del Plan Estratégico Regional y de los programas y proyectos que sean de interés común para las entidades que conforman la Región Central y que conduzcan al desarrollo integral sostenible del territorio dentro de los límites de su competencia; para lo cual contará con las prerrogativas que el ordenamiento jurídico establece para las entidades públicas y establecer un banco de proyectos y un banco de tierras para el desarrollo de los proyectos de impacto regional.

Los hechos regionales identificados y aprobados por la RAPE Región Central son competitividad y proyección internacional, gobernanza y buen gobierno, infraestructura de transporte, logística y servicios públicos, seguridad alimentaria y desarrollo rural y sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos.¹⁸

En el año 2015 se creó el Comité de Integración Territorial (CIT), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 614 de 2000 que define los Comités de Integración Territorial como “cuerpos colegiados en los cuales las autoridades competentes concertarán lo referente a la implementación de los planes de ordenamiento territorial y a la presentación de la visión estratégica de desarrollo futuro del área de influencia territorial”.

El CIT actualmente está constituido por Cundinamarca, Bogotá, Corporinoquia, la CAR y 26 municipios del Departamento: Bojacá, Cajicá, Cota, Chía, Chipaque, Choachí, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Granada, La Calera, Madrid, Mosquera, Pasca, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Soacha, Sopó, Subachoque, Ubaque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón y Zipaquirá. Sus líneas de acción están relacionadas con la planificación y gestión territorial, la gobernanza y la consolidación de una identidad regional que permita el desarrollo de iniciativas conjuntas en el territorio.

En el período 2016-2019 se adelantaron numerosos estudios que han permitido diagnosticar y caracterizar la Región, al tiempo que se puso en operación, en conjunto entre las Secretarías de Planeación de Bogotá y Cundinamarca, el Observatorio de Dinámicas Urbano Regionales, ODUR y la Infraestructura de Datos Espaciales Regional, IDER.

Para el período 2020-2023, de manera excepcional, en los planes de desarrollo departamental “Cundinamarca, ¡Región que Progresa! y el plan del Distrito Capital “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”, se definieron 23 metas conjuntas que están siendo implementadas por los dos gobiernos, como parte de la agenda de integración regional.

De lo anterior se concluye que a pesar de la existencia de la RAPE-Región Central para la escala supradepartamental y del Comité de Integración Territorial para la escala de borde, es decir, para la relación con los 20 municipios cercanos, y de la disposición y voluntad de los actuales mandatarios de Bogotá y Cundinamarca para trabajar en conjunto era necesaria y urgente la existencia de una figura formal y de largo plazo para gestionar las relaciones de Bogotá, Cundinamarca y los municipios del Departamento, lo que llevó a la creación de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, mediante el Acto Legislativo N.º 02 de 2020, como entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial, con el objeto de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo.

¹⁸ Acuerdo Regional 01 de 2014 por el cual se adoptan estatutos internos de la Región Administrativa y de Planificación, RAPE-Región Central.

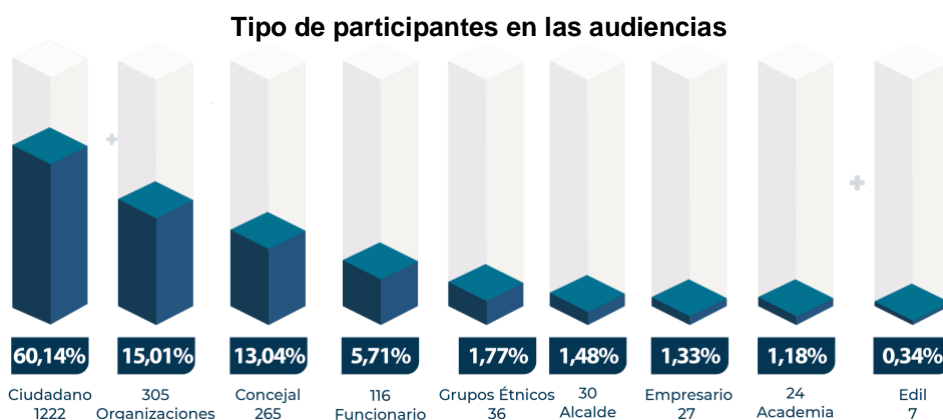
3. Participación ciudadana en la construcción del presente proyecto de ley

La Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Congreso de la República han promovido una amplia y activa participación en la construcción del presente proyecto de ley orgánica.

De hecho, mediante proposición de la Cámara de Representantes del 3 de agosto de 2020 se adoptó el protocolo de participación ciudadana y de los entes territoriales para la elaboración de la Ley orgánica que regulará la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, el cual “en cumplimiento del numeral 1 del párrafo segundo del artículo 325 de Constitución Política de Colombia, el Congreso de la República, en articulación con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, pondrá en marcha el presente protocolo de participación ciudadana y de entes territoriales que deberá llevarse a cabo entre la fecha y el 16 de diciembre de 2020”.¹⁹

Los objetivos planteados en protocolo para el proceso de participación fueron: “i. Socializar y hacer pedagogía sobre la reforma constitucional al artículo 325 que creó la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y sobre los elementos que deberá desarrollar la Ley Orgánica. ii. Contribuir a la consolidación de una visión compartida de desarrollo sostenible regional teniendo en cuenta los instrumentos existentes de ordenamiento territorial de los municipios, el Distrito y el Departamento. iii. Escuchar a la ciudadanía y recibir sus propuestas para la elaboración de la Ley Orgánica que desarrollará las reglas para el funcionamiento de la Región.”²⁰

Se realizaron en total 68 audiencias, con la participación de 3.376 asistentes, de los cuales 2.032 participaron con intervenciones, para un total de 6.147 propuestas recibidas tanto en las audiencias, a través de la página web y en los chats de las transmisiones.



A partir del 24 de agosto del 2020 y hasta el 17 de octubre se desarrolló la primera fase de participación que comprendió la realización de 24 audiencias públicas virtuales en 7 reuniones por provincias y 6 audiencias con las localidades del Distrito Capital. Además, se realizaron 12 audiencias municipales semipresenciales, bajo la coordinación de la Gobernación de Cundinamarca, las cuales complementaron la agenda planteada en la proposición de la Cámara de Representantes.

Las audiencias provinciales se realizaron en: Sabana Occidente, Sabana Centro, Soacha, Oriente – Guavio - Medina y Sumapaz, Alto Magdalena, Magdalena Centro y Tequendama, Bajo Magdalena, Gualivá y Rionegro y Almeidas y Ubaté. Las audiencias municipales se realizaron en: Funza, Madrid,

¹⁹ Proposición Cámara de Representantes. Agosto de 2020

²⁰ Idibem

Mosquera, Chía, Cajicá, Sopó, Cota, La Calera, Facatativá, Zipaquirá, Fusagasugá. Las audiencias locales se realizaron en: Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón y Kennedy, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Bosa. (Ver cuadro Programación Espacios de Participación 2020)

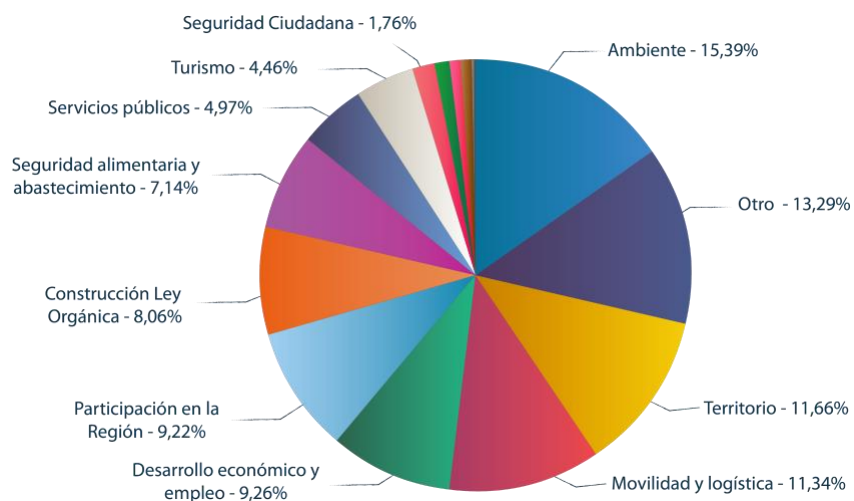
En esta primera fase asistieron 2.294 personas, intervinieron 1.267 y se recibieron 3.537 aportes ciudadanos.

FASE I

N°	Caracterización	Audiencias	Asistentes	Participantes
1	MUNICIPIOS	11	1162	571
2	PROVINCIAS	7	674	414
3	LOCALIDADES	6	458	282
TOTAL		24	2.294	1.267

Los temas que los participantes consideraron de mayor importancia para ser abordados por la Región Metropolitana son ambiente (15,39%), otro (13,29), territorio (11,66%), movilidad y logística (11,34%) y desarrollo económico y empleo (9,26%).

Principales temas que debería abordar la Región Metropolitana²¹



Con estos insumos se procedió a elaborar el primer borrador de estructura de ley orgánica que se socializó en un evento virtual el 22 de octubre de 2020, en el cual también se recibieron propuesta y observaciones de los asistentes.

²¹ Resultados primera y segunda fase de participación. www.regionmetropolitana.com

La segunda fase se llevó a cabo entre el 29 de octubre y el 11 de diciembre e incluyó la realización de otros 43 espacios de participación entre encuentros sectoriales, temáticos y poblacionales y talleres con Concejos Municipales.

FASE II

N°	Caracterización	Asistentes	Participantes
1	SECTORIALES	806	304
2	POBLACIONALES	423	155
3	CONCEJOS MUNICIPALES	224	147
TOTAL		1.453	606

Se realizaron nueve encuentros sectoriales de movilidad, ambiente, ciencia y tecnología, desarrollo social, agropecuario, turismo, hábitat y vivienda, desarrollo económico- competitividad, y servicios públicos. También se desarrollaron 10 encuentros poblacionales con: mujeres, jóvenes, consejos afro, juntas de acción comunal, comunidades indígenas, Pueblo Rrom, personas con discapacidad, LGTBI, consejos de cultura y consejos territoriales de planeación de Bogotá y Cundinamarca.

Así mismo, la segunda fase incluyó la realización de cuatro encuentros temáticos sobre los contenidos de la ley, siendo el primero de ellos el de presentación del primer borrador y luego las audiencias sobre hechos metropolitanos, gobernanza y financiación.

Además, del 16 de octubre al 11 de diciembre, la Gobernación de Cundinamarca realizó 19 talleres con los concejos municipales de: Mosquera, Facatativá, Bojacá - El Rosal - Subachoque y Zipacón, Chía, Cajicá, Sopó, Cota, Tenjo -Cogua - Gachancipá - Nemocón - Tabio y Tocancipá, Zipaquirá, La Calera, Soacha, Girardot, Sibaté y Fusagasugá, para un total de 168 intervinientes.

Se replicó el mismo ejercicio de talleres, pero con convocatoria de alcance provincial, realizándose con los concejos de las provincias de Oriente, Guavio, Medina, Sumapaz, Ubaté, Almeidas, Bajo Magdalena, Gualivá, Rio Negro, Alto Magdalena, Alto Magdalena, Magdalena Centro, Tequendama, para un total de 147 intervenciones.

A partir de los insumos producto del proceso de participación, la Secretaría de Integración Regional de Cundinamarca, en articulación con la Secretaria Distrital de Planeación, diseñó una herramienta de recopilación de información y presentación de resultados. Los resultados de las fases I y II del proceso de participación, así como las ayudas memoria de las audiencias se encuentran en la página web www.regionmetropolitana.com

Cuadro No. 1 Programación Espacios de Participación 2020



**¡Construyamos
La Región
Metropolitana!**

REGIÓN METROPOLITANA
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

Conéctese con este importante proceso
en el que juntos construiremos la Región Metropolitana
Bogotá - Cundinamarca

Síganos en las redes sociales de la Gobernación
de Cundinamarca

 cundinarmacagob
  Gobernación
de Cundinamarca
  @CundinamarcaGob

ACTIVIDAD	REGIÓN	FECHA
Encuentros provinciales, municipales y locales	Provincia Sabana Occidente	Lunes 24 de agosto
	Funza	Jueves 27 de agosto
	Suba	Sábado 29 de agosto
	Provincia Sabana Centro	Lunes 31 de agosto
	Madrid	Martes 1 de septiembre
	Mosquera	Jueves 3 de septiembre
	Usaquén	Sábado 5 de septiembre
	Provincia Soacha	Lunes 7 de septiembre
	Chía	Martes 8 de septiembre
	Cajicá	Jueves 10 de septiembre
	Grupo 1: Provincias Oriente, Guavio, Medina y Sumapaz	Lunes 14 de septiembre
	Sopó	Martes 15 de septiembre
	Cota	Jueves 17 de septiembre
	Engativá, Fontibón, Kennedy	Sábado 19 de septiembre
	Grupo 2: Provincias Alto Magdalena, Magdalena Centro y Tequendama	Lunes 21 de septiembre
	La Calera	Martes 22 de septiembre
	Facatativá	Jueves 24 de septiembre
	Grupo 3: Provincias Bajo Magdalena, Qualivá y Rionegro	Lunes 28 de septiembre
	Zipaquirá	Jueves 1 de octubre
	Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo	Sábado 3 de octubre
Grupo 4: Provincias Almeidas y Ubaté	Lunes 5 de octubre	
Soacha	Jueves 8 de octubre	
Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe	Sábado 10 de octubre	
Fusagasugá	Jueves 15 de octubre	
Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Bosa	Sábado 17 de octubre	
Socialización	Primera socialización,	Lunes 19 de octubre
Encuentros temáticos	Hechos metropolitanos y hechos regionales	Lunes 23 de noviembre
	Procedimiento de ingreso de cada municipio y participación ciudadana	Lunes 30 de noviembre
	Sistema de toma de decisiones, estructura, financiación y control político	Lunes 7 de diciembre
	Sector movilidad	Jueves 22 de octubre
	Sector ambiente	Jueves 29 de octubre
	Sector ciencia y tecnología	Jueves 5 de noviembre
	Sector desarrollo social	Jueves 12 de noviembre
	Sector Hábitat y vivienda	Jueves 19 de noviembre
	Sector desarrollo económico y competitividad	Jueves 26 de noviembre
	Consejos territoriales de Planeación de Bogotá y de Cundinamarca	Jueves 3 de diciembre
Socialización	Segunda socialización	Lunes 14 de diciembre





El viernes 18 de diciembre de 2020 en el Salón Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca, en un evento semipresencial, se presentaron los resultados de los aportes ciudadanos recolectados durante la segunda fase de participación y los contenidos del segundo borrador.

Las audiencias y encuentros temáticos fueron transmitidos por la página de Facebook de Región Metropolitana llegando con la transmisión a 670.000 cuentas, 273.000 cuentas dieron *play-click* para ver la transmisión y 35.000 interacciones, ya sea porque dieron *like* o hicieron un comentario.

En el año 2021, desde el 12 de enero hasta el 15 de julio la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá han participado en 32 sesiones de socialización de los avances del proyecto de Ley Orgánica de Región Metropolitana.

Cuadro No. 2 Reuniones socialización 2021

No.	Fecha	Organización
1	Febrero 3 de 2021	Alianza Logística Regional
2	Febrero 26 de 2021	Comisión Regional de Competitividad
3	Marzo 4 de 2021	Alianza Logística Regional
4	Marzo 8 de 2021	Alianza Logística Regional
5	Marzo 31 de 2021	Reunión Probogotá
6	Mayo 13 de 2021	Conversatorio Concejo Municipal Chía
7	Mayo 19 de 2021	Presentación Comisión Regional CTPD-Bogotá
8	Mayo 20 de 2021	Reunión Asoáreas-AM Valle de Aburrá
9	Mayo 28 de 2021	Presentación RM alcaldes localesde borde
10	Mayo 28 de 2021	Comisiones regionales de Cy T de Cundinamarca
11	Junio 2 de 2021	Reunión gremios
12	Junio 8 de 2021	Reunión Secretarios de Planeación Sabana
13	Junio 8 de 2021	Reunión Asocentro
14	Junio 9 de 2021	Comisión Regional de Ordenamiento Territorial
15	Junio 11 de 2021	Reunión Juntas Administradoras Locales de borde
16	Junio 13 de 2021	Conversatorio Juntas de Acción Comunal Cundinamarca
17	Junio 21 de 2021	Junta Administradora Local Usaquén
18	Junio 21 de 2021	Reunion Banco Mundial
19	Junio 23 de 2021	Junta Administradora Local Engativá
20	Junio 25 de 2021	Asamblea Asocentro
21	Junio 25 de 2021	Junta Administradora Local Suba
22	Junio 29 de 2021	Reunión Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá
23	Junio 30 de 2021	Comité Plan Maestro de Abastecimiento
24	Julio 6 de 2021	Reunión Ascun y rectores
25	Julio 7 de 2021	Junta Administradora Local Kennedy
26	Julio 8 de 2021	Junta Administradora Local Ciudad Bolívar
27	Julio 9 de 2021	Junta Administradora Local Sumapaz
28	Julio 10 de 2021	Junta Administradora Local Fontibón
29	Julio 11 de 2021	Junta Administradora Local Usme
30	Julio 12 de 2021	Reunión Uniminuto-Red Reune
31	Julio 14 de 2021	Reunión Probogotá, Camacol y CCB
32	Julio 15 de 2021	Junta Administradora Local Chapinero

Los diferentes espacios de participación realizados en el transcurso del año desde la aprobación del Acto Legislativo han permitido identificar las opiniones y propuestas de diversos actores para la definición del funcionamiento de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca. Por lo tanto, los resultados de estos ejercicios constituyeron insumos valiosos para la estructuración y detalle del marco legal que permita su adecuado funcionamiento.

Además, se elaboraron dos borradores de proyecto de ley, los cuales se presentaron en las audiencias públicas realizadas el 22 de octubre y el 18 de diciembre y estuvieron disponibles en la página web www.regionmetropolitana.com para recibir comentarios de la ciudadanía.

4. Descripción del proyecto

La presente iniciativa legislativa desarrolla el Acto Legislativo N.º 02 de 2020 y propone el proyecto de ley orgánica que posibilitará el funcionamiento de la Región Metropolitana de Bogotá – Cundinamarca, de acuerdo con los siguientes temas y alcance:

4.1. Objeto

Desde antes de la adopción del Acto Legislativo N.º 02 de 2020 la Corte Constitucional ya había resaltado que:

“no existe parámetro de similitud entre los demás distritos y municipios del país y las Áreas Metropolitanas que puedan llegar a conformar, frente al Distrito Capital, sus municipios colindantes y el Área Metropolitana que éstos puedan llegar a constituir, ya que no son distritos o municipios que se encuentren en una situación análoga o asimilable. Lo anterior, dada su especialidad y particularidad fáctica y jurídica, razón por la cual la misma Constitución determinó en su artículo 322 CP que el régimen político, fiscal y administrativo de Bogotá D.C., incluyendo en este caso la conformación de un Área Metropolitana, de acuerdo con una interpretación sistemática con el artículo 325 CP, estaría determinado por una ley especial, una ley orgánica diferente a la ley orgánica que fije el régimen general para las Áreas Metropolitanas. Esto cumple con una clara finalidad constitucional, la cual es que dicha ley especial responda a la particular situación socio-económica, administrativa, política y fiscal, a la especial naturaleza fáctica y jurídica, así como a las necesidades y exigencias particulares del Distrito Capital de Bogotá y sus municipios circunvecinos, que no son comparables o asimilables a los demás distritos y municipios del país, de manera que no se vulnera el artículo 13 CP”²².

La reforma introducida al artículo 325 C.P. con el Acto Legislativo N.º 02 de 2020 reiteró la especialidad del régimen para la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca y dispuso que debía adoptarse a través de una ley orgánica. De conformidad con lo anterior, la propuesta normativa delimita como su objeto la adopción de este régimen especial y, en tal virtud, la definición y reglamentación de su funcionamiento, dentro de la autonomía reconocida por la Constitución Política. Igualmente, reitera las finalidades dispuestas por el constituyente y que se buscan alcanzar con esta nueva entidad constitucional.

4.2. Finalidad

El proyecto de ley plantea que la Región Metropolitana tenga como finalidad garantizar la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible, así como la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, promoviendo el desarrollo armónico, la equidad, el cierre de brechas entre los territorios y la ejecución de obras de interés regional, recogiendo lo establecido en el Acto Legislativo 002 de 22 de julio de 2020.

4.3. Naturaleza

²² Sentencia C-179 de 2014.

En concordancia con lo dispuesto por el Acto Legislativo N.º 02 de 2020, el proyecto establece la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca como una entidad administrativa de asociatividad regional con régimen especial, dotada de personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen administrativo y fiscal especial.

Igualmente, la propuesta sujeta la entidad a las entidades territoriales que la integran resaltando que estas concurren en el ejercicio de las competencias que les corresponden, con el fin de hacer eficaces los principios constitucionales de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad en la función administrativa y en la planeación del desarrollo dada su interdependencia geográfica, ambiental, social y económica.

Como se trata de una ley orgánica, el proyecto contiene normas que guardan relación con la distribución de competencias entre la Región Metropolitana y las entidades que concurren a ella en el ejercicio de sus funciones y competencias propias.

4.4. Jurisdicción y domicilio

Como requisito necesario para delimitar el ejercicio de su competencia, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 325 C.P., modificado por el Acto Legislativo N.º 02 de 2020, se reitera que la jurisdicción de la Región Metropolitana corresponde a la totalidad del territorio del Distrito Capital y los municipios de Cundinamarca que se asocien.

Por otra parte, se deja como un asunto propio que debe decidirse autónomamente por el máximo órgano de gobierno de la Región Metropolitana, esto es, el Consejo Regional que reúne a los representantes de las entidades asociadas, la definición del domicilio y la sede de la entidad.

4.5. Principios

Como carta de navegación tanto para las entidades territoriales asociadas a la Región Metropolitana, como para sus servidores durante su período de gobierno, el proyecto de ley orgánica busca plasmar los principios que deben orientarlos en su gestión, buscando garantizar que se alcancen sus fines, así como la ejecución de políticas públicas, planes y programas.

Atendiendo la particular situación socio-económica, administrativa, política y fiscal; la especial naturaleza fáctica y jurídica; y las necesidades y exigencias particulares del Distrito Capital de Bogotá y los municipios del Departamento de Cundinamarca, se proponen los principios de autonomía territorial, sostenibilidad, convergencia socioeconómica, pluralidad, identidad regional, gradualidad, economía y buen gobierno, especialidad y participación.

1.- Autonomía territorial: Las entidades territoriales que conformen la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca mantendrán su autonomía territorial y no quedarán incorporadas al Distrito Capital. La Región Metropolitana respetará la autonomía de los municipios que sean parte, de Bogotá y de Cundinamarca. Las competencias municipales, departamentales y distritales se respetarán bajo los gobiernos locales y sus concejos municipales.

2. Sostenibilidad: se buscará la gestión eficiente de los recursos naturales, las áreas protegidas y los servicios ecosistémicos, permitiendo su preservación para las necesidades futuras y buscando equilibrio entre el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

3.- Convergencia socioeconómica: la Región Metropolitana contribuirá al equilibrio entre las entidades territoriales y al reconocimiento de las oportunidades de desarrollo.

4.- Pluralidad: además de reconocer las diferencias geográficas, institucionales, económicas, sociales, étnicas y culturales de las entidades territoriales que se asocien, la Región Metropolitana garantizará la participación en los proyectos que cuenten con enfoque diferencial.

5.- Identidad regional: la Región Metropolitana promoverá, fortalecerá y consolidará la identidad y sentido de pertenencia regional.

6.- Gradualidad: En función de los hechos metropolitanos, las funciones y competencias de la Región Metropolitana se asumirán de manera gradual y progresiva.

7.- Economía y buen gobierno: Se promoverá la auto sostenibilidad económica, el saneamiento fiscal, la profesionalización, la optimización del gasto público y el buen gobierno.

8.- Especialidad: La Región Metropolitana solo puede intervenir en los temas objeto de su competencia, sin que pueda intervenir en las competencias exclusivas de los municipios.

9.- Participación: Se promoverá la participación, concertación y cooperación de los ciudadanos, así como el control social y la transparencia en la gestión pública.

4.6. Entrada en funcionamiento de la Región Metropolitana

El proyecto contempla que luego de que se surta lo establecido en el Acto Legislativo N.º 02 de 2020, que en su parágrafo transitorio 1.º dispone que la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca entra en funcionamiento cuando se vote su ingreso en el Concejo Distrital y la Asamblea Departamental, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, como miembros del Consejo Regional y en cumplimiento de esta decisión de las corporaciones públicas representativas, suscribirán un convenio de asociación y adaptarán el estatuto transitorio para el funcionamiento de la Región Metropolitana.

4.7. Procedimiento y condiciones para la asociación de los municipios a la Región Metropolitana

Atendiendo que el Acto Legislativo N.º 02 de 2020 facultó al Concejo Distrital y la Asamblea Departamental para votar el ingreso a la Región Metropolitana, la propuesta contempla como parte del procedimiento para asociarse a la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca que los municipios de Cundinamarca podrán hacerlo a través de sus

concejos municipales, cuando compartan dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas, para uno, algunos o todos los hechos metropolitanos. Para lo anterior se prevé que se conformará un ámbito geográfico para cada una de las áreas temáticas definidas en el proyecto, y las demás que determine el Consejo Regional (parágrafo 2º, artículo 5).

El proyecto precisa que la iniciativa de asociación corresponderá al alcalde municipal o a la tercera parte de los concejales del municipio.

Adicionalmente se propone incorporar un mecanismo que garantice la participación ciudadana en esta decisión. Así, se contempla que una vez sea radicado el proyecto de Acuerdo, el respectivo concejo municipal realizará al menos un cabildo abierto.

Al respecto, sobre los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Constitución Política, la sentencia C-150 de 2015 de la Corte Constitucional precisó que los ciudadanos tienen diversos grados de participación en la toma de decisiones, a través de los siguientes mecanismos de participación ciudadana: (i) los ciudadanos pueden determinar quien tomará las decisiones (elección de representantes); (ii) los ciudadanos pueden promover una deliberación para la toma de decisiones (cabildo abierto e iniciativa popular normativa) o; los ciudadanos pueden adoptar una decisión directamente (referendo, consulta popular).

De conformidad con la Ley 134 de 1994, artículo 9º, el cabildo abierto es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.

Sobre este mecanismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-150 de 2015 reiteró que *“se constituye en la forma más efectiva para que los ciudadanos residentes en los respectivos entes territoriales, puedan discutir y estudiar los asuntos que son de interés para la comunidad”*.

Igualmente, en la misma sentencia, la Alta Corte precisó que mediante el cabildo abierto se pretende *“ampliar los escenarios de participación de los ciudadanos y, en concreto, que la comunidad política de manera directa y pública, intervenga y decida acerca de los asuntos propios de la respectiva población. (...)”*. Asimismo, advirtió que en este mecanismo de participación ciudadana *“los habitantes tienen el derecho de participar directamente en la discusión que tenga ahí lugar con el fin de expresar su opinión, sin intermediarios, sobre los asuntos de interés para la comunidad”*.

Siguiendo los anteriores criterios jurisprudenciales, la propuesta reconoce una doble garantía democrática. Por una parte, que la decisión definitiva para asociarse le corresponde a la corporación de elección popular del municipio y, por otra, que dicha corporación pública debe promover de manera previa la participación, el diálogo y la deliberación sobre la decisión con los ciudadanos a través del mecanismo más efectivo para ello: el cabildo abierto.

Adicionalmente, como expresión de esa radical importancia de la decisión y la garantía democrática que brindan las corporaciones públicas de elección popular, se propone que el proyecto de asociación a la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca sea aprobado

por un cuórum cualificado, esto es, deba ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros del respectivo concejo.

Por último, de acuerdo con lo dispuesto por el Acto Legislativo N.º 02 de 2020, se reitera que los municipios que conformen la Región Metropolitana mantendrán su autonomía territorial y no quedarán incorporados al Distrito Capital. En concordancia con lo anterior, y dado el reconocimiento constitucional de mayor jerarquía a las decisiones de la Región Metropolitana, se precisa que los municipios asociados ejercerán sus competencias a través de la región en aquellas materias definidas como hechos metropolitanos y deberán armonizar sus planes y programas a aquellos que en el marco de sus competencias adopte la región (parágrafo 1º.)

4.8. Ámbito geográfico para el ejercicio de competencias

Para la adecuada gestión de los hechos metropolitanos y la identificación de las dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas que compartan los municipios, se propone que el Consejo Regional, como máximo órgano de gobierno de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, defina y actualice los municipios que hacen parte del ámbito geográfico en el que ejercerá sus competencias en cada una de las áreas temáticas previstas, así como en los hechos metropolitanos que se declaren.

Con el fin de facilitar el inicio de funciones a la mayor brevedad posible, y sin perjuicio de la decisión del Consejo Regional, el proyecto propone, de manera indicativa, la conformación de un ámbito geográfico, con la identificación de los municipios respectivos, por cada una de las siguientes áreas temáticas: movilidad; servicios públicos; seguridad, convivencia y justicia; seguridad alimentaria y comercialización; desarrollo económico; ordenamiento territorial y hábitat; y medio ambiente, sobre las cuales se ejercerán las competencias definidas en la ley.

Como mecanismo de participación y expresión de la adecuada gestión de las competencias y de las necesidades de los municipios y sus comunidades, se prevé que los municipios que no hayan sido incluidos en el ámbito geográfico de un área temática o que consideren un nuevo tema o hecho regional que implica la gestión desde la Región, podrán presentar una moción de insistencia sustentando su interés y pertinencia ante el Consejo Regional, la cual deberá resolverse en un plazo no mayor a 3 meses.

Dado que cada área temática presenta diversos tipos de dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas entre los municipios y Bogotá, se identificaron las interacciones más intensas para priorizar el conjunto de municipios o ámbito geográfico en cada tema.

Esta identificación inicial constituye una caracterización de la magnitud actual de los flujos o interacciones en cada tema entre los municipios y Bogotá, mediante el análisis de variables cuantitativas elaboradas con fuentes de información existentes y actualizadas.

El análisis realizado propone, a partir de estas variables, los criterios técnicos para seleccionar de manera prioritaria los municipios donde se evidencian las mayores interdependencias en cada área temática, con lo cual se propone un ámbito geográfico óptimo y prioritario para promover la asociación de los municipios y ejercer las competencias en cada uno de los temas. Este análisis de variables se realiza sobre la situación actual y a partir de fuentes de información existente, lo que implica que el Consejo

Regional debe definir y actualizar el ámbito geográfico de cada una de las áreas temáticas previstas en el proyecto de ley, así como en los hechos metropolitanos que se declaren, para lo cual se soportará en informes técnicos que caractericen las dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas, y por lo tanto, debe actualizar la información de base y definir los ámbitos prioritarios a partir de la aplicación de criterios técnicos.

El resultado de identificación técnica inicial de los ámbitos a partir de una serie de criterios de selección soportados en variables cuantitativas de fuentes oficiales disponibles, arroja el siguiente resultado:

ÁREA TEMÁTICAS	CRITERIOS	AMBITO GEOGRÁFICO	TOTAL MUNICIPIOS
MOVILIDAD	<p>1) Transporte: • Municipios que aportan más del 1% de los viajes diarios a Bogotá (más de 5.000 viajes diarios) y representan el 99% de los viajes intermunicipales a Bogotá • Municipios donde más del 10% de los ocupados trabajan en Bogotá, representan el 60% de los ocupados de los municipios de la región que trabajan en Bogotá.</p> <p>2) Carga: • Municipios que generan más de 15 viajes diarios de carga a Bogotá. Representan el 90% de viajes de carga de Cundinamarca a Bogotá</p>	Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, Sibaté, Sopó, Tabio, Gachancipá, El Rosal y Bogotá	17 + Bogotá
SERVICIOS PÚBLICOS	<p>1) Acueducto: • Municipios con prestación directa o en bloque de la EAAB, infraestructura de abastecimiento y potabilización de la EAAB, fuentes abastecedoras estratégicas o proyectos conjuntos EPC-EAAB.</p> <p>2) Tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos (Saneamiento): • Municipios de la cuenca del río Bogotá, y que además: disponen más de 20 ton/día en rellenos, o cuentan con estaciones de transferencia para 1.800 ton/mes o más, o plantas de aprovechamiento para 50 ton/mes o más, o estaciones de clasificación y aprovechamiento.</p>	Apulo, Anapoima, Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Choachí, Chocontá, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Fómez, Funza, Gachancipá, Girardot, Guasca, Guatavita, La Calera, La Mesa, Madrid, Mosquera, Sesquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, Villapinzón Zipaquirá y Bogotá	32 + Bogotá
SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	<p>1) Seguridad y convivencia: • Municipios miembros del consejo de seguridad de la Sabana (marzo 2021) • Municipios ubicados en el primer anillo de la estrategia Región Corazón, diseñada en 2020 entre Secretaría de Seguridad de Bogotá, Secretaría de Gobierno de Cundinamarca y municipios.</p>	Funza, Moquera, La Calera, Chía, Soacha, Cota, Tabio, Sopó, Zipaquirá, Guasca, Facatativá, Subachoque, Tenjo, Sibaté, El Rosal, Cajicá, Madrid, Pasca, Choachí, Chipaque, Ubaque y Bogotá.	21 + Bogotá

<p>SEGURIDAD ALIMENTARIA Y COMERCIALIZACIÓN</p>	<p>1) Producción agropecuaria: • Municipios del Departamento principales abastecedores de alimentos para Bogotá 2) Logística de abastecimiento: • Municipios estratégicos para localización de equipamientos logísticos en el entorno de Bogotá (centrales de abastos o nodos logísticos) según estudios especializados</p>	<p>Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Tenjo, Zipaquirá, Sopó, Tocancipá, Sibaté, Gachancipá, El Rosal, Guasca, La Mesa, Chocontá, Subachoque, Tausa, Villapinzón, Chipaque, Fusagasugá, Fómeque, Granada, Une, Pasca, Ubaté, Silvania, Cáqueza, San Bernardo, Bogotá.</p>	<p>32 + Bogotá</p>
<p>DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p>1) Dinámica económica: • Municipios con la mayor generación de tributo por actividad económica, suman el 80% del recaudo de ICA de Cundinamarca. 2) Importancia del turismo: •Municipios con 3 de 5 variables de potencial turístico según MinCIT, •Municipios con interés institucional en turismo por la existencia de puntos de información turística.</p>	<p>Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, Tabio, Guasca, La Mesa, Anapoima, Guatavita, El Colegio, Girardot, Ubaque, Bojacá, Nemocón, Suesca, Viotá, Fusagasugá, Ubaté, Arbeláez, Guaduas, La Vega, Nocaima, Vergara, Villeta, Agua de Dios, San Antonio del Tequendama y Bogotá.</p>	<p>35 + Bogotá</p>
<p>ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y HÁBITAT</p>	<p>1) Población: • Municipios contiguos con el mayor saldo neto migratorio desde Bogotá en relación con su población (más de 70 personas por cada 1.000 habitantes), • Municipios contiguos con las tasas más significativas de crecimiento anual (más de 3%). 2) Dinámica de licenciamiento: • Municipios contiguos que licencian en promedio 50.000 m2 anuales o más en usos no residenciales. Suman el 86% del licenciamiento no residencial en Cundinamarca. • Municipios contiguos que licencian en promedio 1.000 unidades de vivienda anuales o más. Son el 85% del licenciamiento residencial en Cundinamarca. 3) Infraestructura: • Municipios en el ámbito de movilidad y transporte</p>	<p>Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Tenjo, Zipaquirá, Sopó, Tocancipá, Sibaté, Gachancipá, El Rosal, Tabio y Bogotá</p>	<p>17 + Bogotá</p>

<p>MEDIO AMBIENTE</p>	<p>1) Cuenca hidrográfica: • Municipios y Bogotá en la cuenca hídrica del río Bogotá.</p> <p>2) Páramos: • Municipios con áreas representativas de ecosistemas de páramo asociados a la cuenca del río Bogotá (Sumapaz-Cruz Verde, Chingaza, Guerrero, Rabanal).</p>	<p>Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, Sibaté, Sopó, Gachancipá, El Rosal, Tabio, Guasca, La Mesa, Chocontá, Tausa, Villapinzón, Chipaque, Subachoque, Anapoima, Guatavita, El Colegio, Girardot, Fómeque, Choachí, Ubaque, Granada, Cogua, Sesquilé, Apulo, Bojacá, Nemocón, Suesca, Viotá, Une, Anolaima, Cachipay, Cucunubá, Quipile, Ricaurte, Tena, Tocaima, Zipacón, Junín, Agua de Dios, San Antonio del Tequendama, Pasca, San Bernardo, Arbeláez, Cabrera, Gutiérrez y Bogotá</p>	<p>56 + Bogotá</p>
------------------------------	--	---	--------------------

Fuentes:²³

Como medida transitoria necesaria para el inicio de funciones de la Región Metropolitana se propone que en el primer año de creación de la Región Metropolitana y, mientras se adelanta el proceso de ingreso de los municipios que componen cada ámbito geográfico, la Gobernación de Cundinamarca coordinará e intermediará entre la Región Metropolitana y dichos municipios para el cumplimiento de sus funciones.

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1222 de 1986, “*Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental*”, dentro de las funciones de competencia de los Departamentos están la participación en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y social y de obras públicas, la prestación de servicios, la asistencia administrativa, técnica y financiera a los municipios, y la promoción del desarrollo de los municipios de su jurisdicción.

Es así como el Departamento de Cundinamarca coordinará y servirá de puente entre los municipios que aún no hayan ingresado a la Región para abordar los temas desde una escala regional y metropolitana que propenda por el equilibrio del territorio.

4.8. Competencias de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca

²³ Fuente: Secretaría de Integración Regional de Cundinamarca y Secretaría Distrital de Planeación (2021). Documento Técnico de Referencia sobre Ámbitos Prioritarios por Áreas Temáticas de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca. Fuente de información de criterios: Movilidad: Encuesta de Movilidad 2019 (universo 18 mpios), Encuesta Multipropósito 2017 (universo 37 mpios), Registro Nacional de Carga 2019 (universo 116 mpios).

Servicios públicos: Datos EAAB y Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca EPC. SUI Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (universo 116 mpios). POMCA Río Bogotá.

Seguridad ciudadana, convivencia y justicia: Secretaría de Seguridad de Bogotá, Secretaría de Gobierno de Cundinamarca.

Seguridad alimentaria y comercialización: Observatorio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Plan Estratégico de Movilidad Ciudad-Región 2018, Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá en reformulación desde 2020.

Desarrollo económico: Operaciones efectivas de caja del SISFUT (DNP) a 2019, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2020.

Ordenamiento territorial y hábitat: Censo DANE 2005 y 2018 y Cálculos de migración SDP, Estadísticas de licencias de construcción DANE para 40 municipios de Cundinamarca 2015-2019

Medio ambiente: Cartografía de páramos de Colombia, Instituto A. von Humboldt (2012), Región Hidrográfica propuesta por el Inst. Quinaxi para EAAB (2013)

La Constitución de 1991 estableció un régimen especial para el Distrito Capital en los artículos 322 a 327 C.P., en los que se definió a ésta como la Capital tanto de Colombia como de Cundinamarca, y se consagró la posibilidad de constituir un Área Metropolitana con la incorporación de Municipios a la Capital, pero prohibiendo a los ciudadanos de la Capital la participación en la política de estos municipios; entre otras medidas.

Esta especialidad en el régimen partió de reconocer que las relaciones entre el Distrito y los municipios de Cundinamarca eran diferentes a las que se dan entre los demás municipios del país, por su acelerado crecimiento, sus necesidades, ubicación geográfica, su impacto económico y otros aspectos. Esa especialidad se reafirmó por el legislador en la Ley 1625 de 2013, mediante la cual reguló las áreas metropolitanas, y en la que señaló que la ley definirá las reglas especiales a las que se sujetaría la conformación de un Área Metropolitana entre Bogotá y los municipios colindantes del departamento de Cundinamarca.

Ese carácter particular llevó a que mediante el Acto Legislativo N.º 02 de 2020 se creara la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca y se consagraran las condiciones y características para que procediera su conformación y funcionamiento. La incorporación de la Región como nueva figura constitucional, con sus particularidades y características, impone que debe aplicarse e interpretarse en relación con las demás normas de la Constitución, porque *“La norma constitucional no puede interpretarse de forma aislada, sino que debe considerarse dentro del conjunto constitucional”*²⁴. Este principio interpretativo refleja la necesaria comprensión sistemática de la Carta Fundamental, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-532 de 2012:

*“5.1. Conforme lo ha señalado de manera reiterada esta Corporación, **la Constitución Política es un texto armónico y coherente, que como tal, debe ser interpretado de manera sistemática, teniendo en cuenta, además, los propósitos y objetivos perseguidos por el constituyente.** Sobre este particular, en la Sentencia SU-1122 de 2001, la Corte tuvo oportunidad de precisar que la Carta “ha de entenderse como un texto que goza de unidad, de suerte que no resulta posible seleccionar caprichosamente las consecuencias normativas que resulten favorables o desfavorables para la solución de un problema puntual. Por el contrario, la solución de las controversias jurídicas de interés constitucional, exige que le sean aplicados al caso controvertido, todas las consecuencias –mandatos, permisiones, prohibiciones y diseños estructurales- previstos en la Carta”.*

De esta manera, la creación, facultades y competencias de la Región Metropolitana no implican automáticamente un desconocimiento de las competencias y funciones constitucionales previstas para los municipios y departamentos, sino que necesariamente dichas normas deben interpretarse y aplicarse de conformidad con las nuevas normas constitucionales dispuestas especialmente para la Región Metropolitana en el Acto Legislativo N.02 de 2020.

Entre las reglas relacionadas con las potestades de la Región Metropolitana, el Acto Legislativo N.º 02 de 2020 dispuso que en lo relacionado con los temas objeto de su competencia, sus decisiones tendrán superior jerarquía sobre las del Distrito, las de los municipios que se asocien y las del departamento de Cundinamarca. Sobre esta nueva regla constitucional es necesario precisar que de esta no se deriva una jerarquía normativa, porque la Constitución no organiza jerárquicamente las normas, sino que establece un régimen de competencias entre las distintas autoridades, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 2014:

“(…) En relación con el cargo tercero, el demandante supone que existe un contenido normativo constitucional que organiza jerárquicamente las normas expedidas por órganos

²⁴ Hesse, Konrad. *“La interpretación constitucional”*, en Escritos de Derecho constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.

municipales y las expedidas por órganos departamentales. Lo cierto es que tal norma Constitucional no existe. La jerarquía normativa dispuesta en nuestra Constitución dispone una organización normativa jerárquica y coloca a las normas de rango constitucional como las más importantes a las que se someten tanto las de rango legal como las de rango reglamentario. A su turno nuestra Constitución otorga a las autoridades administrativas y así a las autoridades territoriales, la competencia de expedir normas con sujeción a la Constitución y a la ley. Por lo que se entiende que estas normas de rango reglamentario, están sometidas tanto a la Constitución como a la ley también. En cambio, en el caso de la relación de las normas reglamentarias entre sí, el orden constitucional no establece jerarquía alguna, sino un régimen de competencias entre las distintas autoridades.

En este orden, el presupuesto de esta acusación es errado y la Corte Constitucional no puede hacer un pronunciamiento de fondo, en tanto no existe una norma constitucional respecto de la cual comparar el contenido del inciso tercero del artículo 32 de la ley 1625 de 2013, en los términos de la acusación presentada en la demanda. Siendo el control de constitucionalidad, una actividad consistente en cotejar una norma de inferior jerarquía con una de rango constitucional, para concluir si la primera atiende a la segunda, resulta imposible realizar este cotejo sino existe un parámetro de control”.

Siguiendo el anterior criterio, el régimen de competencias fijado el Acto Legislativo N.º 02 de 2020 armoniza las competencias de las entidades territoriales que conformen la Región Metropolitana con las que se le reconocen a esta entidad en los temas objeto de sus competencias.

Por otro lado, la reforma constitucional también reconoció la autonomía territorial de los municipios que se asocien, al señalar expresamente que las entidades territoriales que la conformen mantendrán su autonomía territorial y no quedarán incorporadas al Distrito Capital.

De esta manera, la idea de absorción de los municipios a la capital por la magnitud poblacional y económica de Bogotá fue expresamente descartada por el acto legislativo, lo cual obedece a la necesidad de superar la prevención histórica referida párrafos más arriba y que se originó con el Decreto 3640 de 1954, a través del cual se anexaron a Bogotá los municipios de Bosa, Usaquén, Engativá, Suba, Fontibón y Usme.

Aunado a lo anterior, la creación constitucional de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca se justificó especialmente en que *“el crecimiento caótico y desordenado de Bogotá y los municipios circunvecinos o conurbados, es causa y efecto de diversos hechos metropolitanos interjurisdiccionales que no se pueden tramitar de forma efectiva en el marco del esquema actual de la descentralización administrativa y fiscal”*²⁵.

Lo anterior reafirma que para cumplir con las necesidades particulares que justificaron la creación de la Región Metropolitana y permitir su atención, el Acto Legislativo N.º 02 de 2020 estableció un régimen de competencias de las autoridades, en el que las entidades territoriales, en ejercicio de su autonomía, deciden asociarse a la Región Metropolitana, la

²⁵ Exposición de motivos del Proyecto de Acto Legislativo N.º 182 de 2019 Cámara, por el cual se modifica el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones. Gaceta del Congreso N.º 772 del 22 de agosto de 2019, Cámara de Representantes.

cual tendrá una superioridad en las decisiones que adopte en los temas objeto de su competencia.

Debe tenerse en cuenta que la autonomía de las entidades territoriales no se configura como poder soberano, sino que se explica en el principio unitario del Estado y, por ello, se desarrolla en los límites previstos en la Constitución y la ley, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 2014:

“11.- La Corte ha consolidado unas claras líneas jurisprudenciales en el sentido de que la Carta Política de 1991 contempla una forma de Estado que se construye a partir del principio unitario, pero que garantiza, al mismo tiempo, un ámbito de autonomía para sus entidades territoriales. Dentro de ese esquema, la distribución de competencias entre la Nación y los entes territoriales es algo que el ordenamiento superior ha confiado al legislador, para lo cual se le han establecido un conjunto de reglas mínimas orientadas a asegurar una articulación entre la protección debida a la autonomía territorial y el principio unitario, reglas que en ocasiones otorgan primacía al nivel central, al paso que en otras impulsan la gestión autónoma de las entidades territoriales.

En este orden de ideas, se precisa armonizar los contenidos de los principios de unidad y de autonomía, los cuales se limitan recíprocamente. En tal sentido, el juez constitucional en sentencia C- 535 de 1996 consideró que la autonomía debía entenderse como la capacidad de que gozan las entidades territoriales para gestionar sus propios intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley, lo cual quiere decir que si bien, por un lado, se afirman los intereses locales, se reconoce, por otro, “la supremacía de un ordenamiento superior, con lo cual la autonomía de las entidades territoriales no se configura como poder soberano sino que se explica en un contexto unitario.” En esa misma providencia se señaló que “por un lado, el principio de autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y la ley, con lo cual se reconoce la posición de superioridad del Estado unitario, y por el otro, el principio unitario debe respetar un espacio esencial de autonomía cuyo límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla esta última”.

12. También ha precisado la jurisprudencia constitucional el papel que le corresponde cumplir al legislador en la configuración de los ámbitos de la autonomía regional, indicando que ésta se encuentra integrada por “el conjunto de derechos, atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política a las entidades territoriales y a sus autoridades, para el eficiente cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo”.

Dentro de los límites constitucionales de la autonomía de las entidades territoriales, el Acto Legislativo N.º 02 de 2020, a diferencia de lo que sucede en las áreas metropolitanas previstas en el artículo 319 C.P., dispuso la participación del Departamento de Cundinamarca en la Región Metropolitana de Bogotá - Cundinamarca. Como entidad territorial asociada, el Departamento también conservará su autonomía territorial, pero igualmente estará sujeta a las decisiones de la Región Metropolitana. Así, la reforma constitucional consideró necesaria la participación del Departamento en el Consejo Regional, lo que le permitirá no solo velar por el desarrollo integral de todos sus municipios, sino también contribuir en la identificación de temas y asuntos que superan las fronteras municipales y ampliar su dimensión para abordarlos con el enfoque de la región metropolitana.

Los municipios no están obligados a asociarse a la Región Metropolitana, es algo que la reforma constitucional confió a los municipios interesados y a sus intereses particulares, lo cual es acorde plenamente con su autonomía, la cual se conserva y reafirma, además de

ejercerse en su condición de miembros del Consejo Regional, órgano de gobierno de la Región Metropolitana. Es decir, el régimen de competencias mantiene la relevancia de la autonomía de las entidades territoriales asociadas al contemplar que el Consejo Regional, como máximo órgano de gobierno de la Región Metropolitana, está conformado por los alcaldes de los municipios asociados, el Alcalde Mayor de Bogotá y el Gobernador del Departamento de Cundinamarca, quienes deben adoptar las decisiones con el mayor consenso posible.

Por último, es necesario resaltar que la Región Metropolitana no es un ente territorial, es una entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial, frente a la cual la capacidad de configuración legislativa es amplia, por cuanto, la Región Metropolitana obedece a principios de descentralización, pero sin autonomía política, la cual sí le es reconocida constitucionalmente a los entes territoriales en los arts. 1º y 287 Superiores.

De esta manera, la Región Metropolitana se concibe como la herramienta constitucional que permitirá mejorar los procesos de planificación del territorio e implementación de políticas públicas sobre las dinámicas regionales, en particular, aquellos temas que en la exposición de motivos del Acto Legislativo N.º 02 de 2020 se calificaron como prioritarios: transporte y movilidad, prestación de servicios públicos, protección del medio ambiente, ordenamiento del territorio y vivienda, logística, disposición de recursos sólidos, entre otros. A estos la propuesta agrega otros que, por su alcance interjurisdiccional, relevancia, importancia y trascendencia, deben atenderse también con enfoque regional metropolitano, como los relacionados con seguridad ciudadana, convivencia y justicia. Esta identificación y validación de temas de interés para la Región Metropolitana se basa en los estudios preexistentes, en los resultados de los espacios de participación y discusión con los actores de la región que se realizaron desde el año 2020 por parte del Congreso de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, así como en los análisis técnicos realizados por la Gobernación y la Alcaldía Mayor a partir de datos oficiales de diversas fuentes.

Con fundamento en el anterior marco constitucional e interpretativo, la propuesta armoniza las funciones de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca como entidad con decisiones de superior jerarquía en los temas objeto de su competencia, con la autonomía reconocida a las entidades territoriales que se asocien, de modo que resultan coherentes con lo consagrado en la Constitución y su reforma por medio del Acto Legislativo N.º 02 de 2020.

Por otro lado, con el fin de hacer efectivos los principios de concurrencia, complementariedad y coordinación, se prevé que la Región Metropolitana ejercerá: i. Las competencias asignadas por la Constitución y la Ley. ii. Las que le sean transferidas o delegadas por las entidades del orden nacional para ejercicio exclusivo de la Región Metropolitana. iii. Las que sean delegadas por las entidades que las conforman. iv. Las que las entidades que la conformen decidas ejercer en forma conjunta previa calificación de la materia como un hecho metropolitano. v. Las que sean definidas en el acto de constitución de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca. vi. Las que demás que establezca el Consejo Regional.

Dado el reconocimiento de la dificultad que entraña su ejercicio, se contempla que estas competencias se asumirán de manera gradual y progresiva en función de la capacidad

técnica y financiera que adquiera la Región Metropolitana a su entrada en funcionamiento y de acuerdo con la asignación de recursos prevista para cada una de ellas.

De acuerdo con lo anterior, en síntesis, se propone que la Región Metropolitana ejerza sus competencias en las siguientes áreas temáticas:

4.8.1. En materia de movilidad

Entre Cundinamarca y Bogotá, en el 2019, se realizaron más de 390 mil viajes de carga, transportando más de tres millones de toneladas. Los municipios del Departamento que despachan los mayores volúmenes de carga (por encima de 15 viajes diarios) a Bogotá, se encuentran en las cercanías, siendo los principales corredores viales de acceso de carga a la Capital la Calle 13, la Calle 80 y las Autopistas Sur y Norte²⁶.

Los 500 mil viajes a Bogotá desde los 18 municipios más cercanos según la Encuesta de Movilidad de 2019, que se indicaron anteriormente, muestran una intensa dinámica diaria de desplazamiento, que utiliza unos corredores viales cuyas velocidades promedio, en tramos intermunicipales, alcanzan en el mejor de los casos los 47 km/hora promedio²⁷. Además, de 2011 a 2019 la cantidad total de viajes que se reportan en la región aumentó en un 21%²⁸, lo que muestra una dinámica cada vez más intensa en la movilidad que demanda un transporte más eficiente e integrado, proyectos de infraestructura acordes con los vectores de desplazamiento en la región y una coordinación que logre mejorar el tráfico en los corredores regionales, ante lo cual la Región Metropolitana constituye la oportunidad para poner en marcha una institucionalidad específica y acorde con las necesidades regionales de la movilidad.

Ante este panorama, el proyecto propone competencias en materia de movilidad que permitan coordinar el transporte público intermunicipal, del transporte de carga y de la logística regional, ejerciendo como autoridad regional de transporte en los diferentes modos, excepto el aéreo, y planear y ejecutar proyectos de infraestructura de movilidad regional que estén articulados con la visión y el modelo que se plantee en el Plan Director de la Región Metropolitana. Se propone que la Región formule y adopte el Plan de Movilidad Sostenible y Segura de la Región Metropolitana, para dar prelación a los medios de transporte no motorizados y al transporte público con energéticos y tecnologías de bajas o cero emisiones.

4.8.2. En materia de seguridad ciudadana, convivencia y justicia:

Los fenómenos delictivos y riesgos de seguridad, tal como se señaló al inicio de este documento, no se limitan a los límites territoriales político – administrativos. Las cifras y las conexiones entre los municipios del Departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital

²⁶ Registro Nacional de Carga, del Portal Logístico de Carga. Consulta en: <https://plc.mintransporte.gov.co/>

²⁷ CIDER (2017). Documento técnico de soporte del componente regional de la revisión general del POT de Bogotá, con referencia al Plan Maestro Intermodal (2015) del Ministerio de Transporte

²⁸ https://www.movilidadbogota.gov.co/web/encuesta_de_movilidad_2019

permiten afirmar que la seguridad tiene un alcance regional metropolitano. De hecho, en los últimos años se han fortalecido espacios de coordinación en materia de seguridad regional, como el consejo de seguridad de la Sabana de Bogotá y el diseño en 2020 de la estrategia Región Corazón entre Cundinamarca, Bogotá y los municipios vecinos. Por lo tanto, la Región Metropolitana es la instancia adecuada para consolidar las iniciativas regionales; coordinar, gestionar e integrar planes, programas, proyectos y acciones de manera estratégica y articulada, para contrarrestar fenómenos ilegales, delictivos y contrarios a la convivencia y mejorar el acceso a la justicia en la Región Metropolitana.

En este contexto, el proyecto contempla competencias para la Región Metropolitana en esta materia, que le permitan poner en marcha un sistema regional de seguridad, convivencia y justicia, que permita, entre otros temas, optimizar las inversiones en equipamientos regionales de seguridad y contar con un Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia regional en el marco del cual se diseñen planes operativos conjuntos para combatir la criminalidad y mejorar los procesos de captura y judicialización.

4.8.3. En materia de seguridad alimentaria y comercialización

Como lo soportan las cifras presentadas en la parte inicial de este documento, los municipios de donde proviene la mayor cantidad de alimentos que ingresan a Bogotá, se encuentran en Cundinamarca. Sin embargo, en términos de logística se identifican problemas centrales, como altos tiempos y costos de manejo, almacenamiento y transporte, debido a una infraestructura y servicios logísticos insuficientes; los altos costos de intermediación y deficientes sistemas de información. Todo ello contribuye a una oferta de productos con altos precios, pérdida de alimentos, mayores costos para los consumidores y desaprovechamiento de oportunidades de mejora en la calidad de vida de los productores²⁹.

Lo anterior evidencia no solo que el abastecimiento es un fenómeno regional, sino que se requieren mecanismos para que este sistema opere de una manera más eficiente y justa para todos los actores involucrados (productores, distribuidores, consumidores), aprovechando el potencial agrícola de la región y conectando las cadenas de distribución mediante un sistema logístico adecuado para Bogotá y los municipios.

Es así como las competencias propuestas se orientan al desarrollo agropecuario y la seguridad alimentaria regional, que favorezca la producción, las cadenas productivas agropecuarias y forestales, la inserción en mercados, la generación de valor agregado, que implican también una coordinación desde la Región Metropolitana en los aspectos de planeación, financiamiento, desarrollo tecnológico, comercialización, entre otros, para hacer más competitivas estas cadenas.

A la par, se propone que la Región Metropolitana contribuya, en materia de comercialización, a conectar la oferta de alimentos con la demanda pública y privada, y que desarrolle equipamientos de logística de alimentos (centrales de acopio, almacenamiento, procesamiento, entre otros)

²⁹ FAO-SDDE (2018). Línea de Base para la reformulación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos de Bogotá de acuerdo con las dimensiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

4.8.4. *En materia de servicios públicos domiciliarios y TIC*

La interdependencia entre el Distrito Capital y los municipios del Departamento de Cundinamarca, en materia de servicios públicos, se evidencia en varios aspectos. De un lado, la problemática en materia de aguas residuales vincula a los 46 municipios de la cuenca del río Bogotá, al Distrito y al Departamento en las acciones de saneamiento. Existe también una regionalización en la gestión y prestación del servicio agua potable, pues mientras se da una prestación directa y por agua en bloque a 12 municipios por parte de la EAAB, el sistema de abastecimiento y potabilización cuenta con infraestructuras de embalses y plantas de tratamiento ubicadas en la región, que dan soporte a los grandes volúmenes que requiere este servicio. Adicionalmente, del total de 8.714 ton/día de residuos sólidos generados en los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca y Bogotá, la mayoría (6.967) se disponen en Doña Juana, que atiende 8 municipios, seguido por Mondoñedo (1459) que atiende 78 municipios³⁰.

Ante esta situación, el proyecto plantea que la Región Metropolitana coordine, promueva y ejecute acciones orientadas a lograr una adecuada planeación y gestión del recurso hídrico con enfoque regional y diseñe e implemente esquemas regionales concertados para la prestación de servicios públicos y TIC, de calidad, eficientes y sostenibles.. Se propone que a la vez contribuya a la gestión empresarial, realizando seguimiento a la prestación de servicios en su jurisdicción y adelantando acciones de coordinación y gestión para el fortalecimiento administrativo y de gobierno corporativo en las empresas de servicios públicos y TIC.

Finalmente, se propone que Región formule una política regional de gestión, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos y coordinar la implementación de acciones bajo el modelo de economía circular, cambiando el modelo actual hacia su transformación y aprovechamiento.

4.8.5. *En materia de desarrollo económico*

Bogotá y Cundinamarca conforman la región más productiva del país, con la mayor participación del PIB, como se señaló en la introducción. Para aumentar los niveles de competitividad y productividad de la Región es necesario fortalecer una visión económica regional que aproveche y potencie las diversas vocaciones productivas existentes y futuras con la incorporación de tecnología e innovación.

Al revisar la dinámica económica territorial, es notoria la interdependencia de la economía, en particular entre Bogotá y 20 municipios cercanos en sectores de servicios y comercio, como se ha identificado en la Región Vida ampliada de Cundinamarca³¹.. La información reportada a nivel municipal en el SISFUT³² muestra que 12 municipios de la Sabana

³⁰ Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2019). Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos. Análisis SDP-DIRNI.

³¹ Universidad del Rosario, Secretaría Distrital de Planeación, Gobernación de Cundinamarca, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Facatativá (2018). Ocupación Económica y Planificación Territorial de Bogotá y la Región Vida Ampliada de Cundinamarca.

³² DNP (2019). Operaciones efectivas de caja.

(Zipaquirá, Tocancipá, Cajicá, Chía, Sopó, Tenjo, Cota, Funza, Madrid, Facatativá, Mosquera, Soacha) presentan los mayores recaudos del impuesto de industria y comercio ICA, por encima de \$13.300 millones anuales en 2019 y que representan el 80% de todo el recaudo de ICA del Departamento. El indicador de valor agregado municipal que estima el DANE (2018) muestra una tendencia similar, siendo estos mismos 12 municipios, más Fusagasugá y Girardot, los que presentan los mayores grados de importancia económica en la región.

De otro lado, Bogotá y los municipios de Cundinamarca conforman un destino turístico diverso y atractivo con oportunidad para jalonar el desarrollo económico y la generación de empleo en la Región. Al hecho de que Bogotá sea el principal destino turístico del país, primero en el índice de competitividad turística³³, se suma la existencia de importantes atractivos turísticos, diversas rutas y productos turísticos en el Departamento, que a su vez ocupa el puesto 11 en el índice mencionado.

En vista de las condiciones de la economía en la región, el proyecto plantea dentro de las competencias de la Región Metropolitana, Definir, en el Plan Director, una visión de desarrollo económico regional que promueva a la región que fortalezca las vocaciones productivas y que potencie la competitividad de las cadenas productivas, al tiempo que promueva a la región como un centro de comercio internacional, mediante la coordinación de acciones y actores públicos y privados. Para mejorar la competitividad, la Región debe diseñar y promover un plan de logística regional que incluya, como mínimo, una red de equipamientos, infraestructura logística, puntos de acceso, información, entre otros.

Para impulsar el turismo, se propone que la Región diseñe e implemente un Plan de Desarrollo Turístico para la Región Metropolitana con la puesta en marcha de estrategias y proyectos para la para el mejoramiento y fortalecimiento de las competencias y habilidades de los actores de la cadena de valor del sector turismo y la promoción conjunta de la Región.

Dado también que, a pesar del potencial económico de la región, se presentan indicadores de pobreza y desempleo que requieren de un manejo con enfoque regional, se propone que la Región Metropolitana coordine con los actores institucionales relacionados, la promoción del acceso al mercado laboral en la región y el cierre de brechas con énfasis en poblaciones vulnerables, mujeres y jóvenes.

4.8.6. En materia ambiental

Como se vio al inicio de este documento, Bogotá y Cundinamarca comparten ecosistemas claves para el sostenimiento de la biodiversidad y de los recursos naturales de la región. De hecho, el Río Bogotá es el eje ambiental de la Región así como ecosistemas estratégicos³⁴ tales como las áreas de páramo, de humedales y de bosques en el Distrito y el Departamento y su relevancia a nivel nacional e internacional. Además de contar con el Páramo de Sumapaz, el más extenso del mundo, 11 humedales de Bogotá fueron incluidos en la lista de la convención internacional Ramsar. No obstante, el deterioro ambiental y uso

³³ <https://cptur.org/ICTRC/departamentos>

³⁴ IDEAM (2017). Mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.

del recurso hídrico de la cuenca hacen que en el contexto de la crisis climática actual se presenten riesgos de disponibilidad hídrica y vulnerabilidad a emergencias como inundaciones, incendios forestales y deslizamientos en varias zonas del Departamento, incluida la misma cuenca del río Bogotá³⁵, lo que implica que un tema central para la Región sea el medio ambiente.

Las competencias previstas para la Región Metropolitana se refieren, por lo tanto, a la estructuración y ejecución de proyectos ambientales que contribuyan a consolidar efectivamente la Estructura Ecológica Regional, a la articulación de planes y proyectos para coordinar la ejecución de planes de seguridad hídrica y frente a la gestión del clima, y a coordinar con el Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca y los municipios asociados a la Región Metropolitana la realización de estudios y la implementación de proyectos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.

4.8.7. En materia de ordenamiento territorial y hábitat

Bogotá y la Sabana presentan unas dinámicas interrelacionadas de crecimiento urbano. Como se dijo anteriormente, el crecimiento poblacional intercensal (2015 a 1018) ha estado concentrado espacialmente en municipios como Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Zipaquirá, Chía, Mosquera y Madrid, según las retroproyecciones de población del DANE. El licenciamiento de unidades de vivienda y otros usos muestra que los municipios que licencian más de 1.000 unidades anuales, además de Bogotá, son Soacha, Mosquera, Madrid, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Fusagasugá y Girardot. Esta dinámica intensa genera una demanda sobre los municipios para que habiliten suelo para vivienda, que a su vez implica la generación de soportes de infraestructura de movilidad, servicios públicos, equipamientos, entre otros.

La Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca reconoce la necesidad de un desarrollo armónico bajo una visión compartida, que proteja y preserve la ecológica principal y los suelos aptos para la agricultura.

Reconociendo la autonomía de las entidades territoriales asociadas, así como la importancia del ordenamiento organizado en la jurisdicción de la Región Metropolitana, el proyecto plantea que la Región defina en el Plan Director un modelo regional territorial que contenga las políticas, estrategias y proyectos regionales estratégicos para la consolidación de los hechos metropolitanos.

Así mismo, el proyecto propone que la Región formule y coordine planes, programas, proyectos o políticas para la financiación y producción de vivienda y entornos adecuados tanto en zonas urbanas como en áreas rurales para la construcción y mejoramiento de la vivienda rural productiva y sostenible. La Región tendrá la competencia para formular instrumentos de planeación, gestión y de financiación, que permitan el desarrollo de proyectos de importancia estratégica, así como para desarrollar programas y proyectos de mejoramiento de asentamientos, reasentamiento, infraestructura y equipamientos sociales y espacios públicos.

³⁵ IDEAM, PNUD, Distrito Capital y Gobernación de Cundinamarca (2015). Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá - Cundinamarca

Por último, en relación con las anteriores materias y con el fin de garantizar la adecuada atención de las necesidades de las entidades territoriales asociadas, la propuesta reafirma que las competencias en las anteriores materias se ejercerán de acuerdo con la capacidad técnica, financiera y administrativa de la RMBC. Igualmente, atendiendo la dinámica y competencias del Consejo Regional, la normativa del proyecto establece que también ejercerá las que se deriven de los hechos metropolitanos que se declaren.

4.9. Hechos metropolitanos de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

Para la definición y propuesta de criterios para la declaratoria de hechos metropolitanos de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, se realizó una revisión de los conceptos preexistentes en el ordenamiento jurídico y en los ejercicios de planificación territorial.

La Ley 1625 de 2013, que establece el Régimen para las Áreas Metropolitanas, define los hechos metropolitanos como “aquellos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, (que) afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman el Área Metropolitana”.

Por otro lado, el Documento Técnico de Soporte del componente regional para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá³⁶, los hechos regionales se definen como fenómenos que afectan dos o más entes territoriales e implican la necesidad de ejecutar acciones conjuntas para afrontar retos, consolidar procesos o planificar el desarrollo sostenible de la región.

A partir de estos conceptos, el proyecto de ley define, para efectos de la competencia de la Región Metropolitana, que los hechos metropolitanos serán aquellos fenómenos o situaciones relacionados con las dinámicas económicas, sociales, ambientales o territoriales que afecten, impacten o beneficien a un número plural de entidades territoriales asociadas a la Región Metropolitana y cuya acción coordinada garantiza mayor efectividad. Cada hecho metropolitano, para ser gestionado a través de la Región Metropolitana, deberá ser declarado, contará con un plan de ejecución, se enmarcará en las competencias por áreas temáticas definidas para la Región Metropolitana o en las que le deleguen dentro de su autonomía los entes asociados, y su gestión se desarrollará en los ámbitos geográficos de las áreas temáticas.

La Región Metropolitana, como nueva figura constitucional creada por el Acto Legislativo N.º 002 de 2020, deberá contemplar no solamente las relaciones de carácter metropolitano, sino también las referidas a la región en cuanto a los hechos regionales que requieren de una acción más amplia que la municipal. De esta manera, se propone que cada hecho metropolitano, para ser considerado por la Región Metropolitana, debe contar con un ámbito territorial específico que permita una adecuada gestión de sus dinámicas y tener una relación funcional directa de los municipios del Departamento de Cundinamarca con el Distrito Capital.

³⁶ Secretaría Distrital de Planeación. Documento Técnico de Soporte Componente Regional del POT. Cider. Universidad de Los Andes. 2017

4.9.1. Parámetros para la identificación de hechos metropolitanos

De acuerdo con el Acto Legislativo N.º 02 de 2020, párrafo transitorio 2.º, que prevé que en la ley orgánica: “6. Se establecerán los parámetros de identificación de hechos metropolitanos” la propuesta desarrolla los parámetros que permitirán determinar los asuntos que tendrán el carácter de hechos Metropolitanos.

Así, se contemplan como tales el alcance territorial -en el que se determina la necesidad de establecer un ámbito geográfico a partir de las dinámicas existentes y presentar una relación funcional directa con Bogotá-, la sostenibilidad, el beneficio multiactor, eficiencia económica y organización institucional relacionados con el fenómeno que permitirán calificarlo como de alcance regional metropolitano. Estos diferentes criterios permitirán determinar la interdependencia o alcance interjurisdiccional de las situaciones que serán calificadas como hechos metropolitanos.

4.9.2. Procedimiento para la declaratoria de hechos como metropolitanos

La propuesta se sustenta en una alta preocupación por la justificación suficiente y técnica de la declaratoria de un hecho como metropolitano. Así, y dentro de los fines de alcanzar el mayor consenso posible entre las entidades territoriales asociadas, se establecen los pasos necesarios para la declaratoria del hecho como metropolitano por el Consejo Regional, a iniciativa del director de la Región Metropolitana, quien funge como Secretario Técnico.

Esa alta exigencia de contar con un adecuado sustento se complementa con mecanismos que concreten el principio de planeación, como es fijar el horizonte técnico que permitirá gestionar de manera eficiente y efectiva el hecho declarado como metropolitano.

Así, la propuesta normativa resalta que, además de cumplir los criterios del documento técnico de soporte referido, como el diagnóstico y análisis del hecho a declarar, y los demás parámetros contemplados anteriormente para la declaratoria, el documento técnico debe incluir la ruta para la implementación de los planes y programas que se proponen para la gestión del hecho metropolitano, con sus plazos correspondientes.

4.10. Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-620 de 2016, precisó que para la Constitución de 1991 la planeación es fundamental para el cumplimiento de las finalidades del Estado de la promoción de la prosperidad general, la efectividad de los derechos y deberes, el bienestar general y la calidad de vida de la población:

“27.1. La fórmula social y de derecho adoptada por el Constituyente de 1991 para la configuración estatal, consecuencia de la comprensión que venía construyéndose de tiempo atrás tanto internacional como nacionalmente sobre el rol del Estado, se refleja en la vinculación de la actuación de sus autoridades al cumplimiento de finalidades relacionadas con la promoción de la prosperidad general, la efectividad de los derechos y deberes previstos en la Carta[139], el bienestar general y la calidad de vida de la población[140].

El compromiso por la satisfacción de unas condiciones adecuadas que garanticen la vida digna, exigió al constituyente la configuración, entre otros asuntos, de un régimen económico en el que la planeación juega un papel fundamental y que inspiró la creación de un instrumento como el Plan Nacional de Desarrollo, que cuenta con su propia fuerza de ejecución”.

Sobre el cambio generado por la Constitución de 1991 en esta materia, en la Sentencia C-478 de 1992, caracterizó el sistema de planeación en los siguientes términos:

“El sistema de planeación que trae la C.P. de 1991 (capítulo 2, Título XII), se diferencia del anterior en tres aspectos fundamentales: a) propicia un sistema transparente. En los Consejos de Planeación, a todo nivel, intervendrán representantes de la ciudadanía y de los sectores en que ésta se divide (art. 340); b) la participación de las entidades territoriales es mayor, en la medida en que hacen parte del Consejo Nacional de Planeación, órgano consultivo del gobierno para la elaboración del plan nacional (art. 340), participan directamente en la elaboración del plan (art. 341 C.P./91); c) buscar convertir el instrumento de planeación una realidad. Si el Congreso no aprueba el plan nacional de inversiones (parte del PND), el Gobierno lo pondrá en vigencia mediante un decreto con fuerza de ley (art. 341 inciso 3º C.P./91).”

Aunque su configuración parte de la iniciativa gubernamental, el artículo 341 de la Carta exige que en la formulación del plan nacional participen las autoridades de planeación de las entidades territoriales y el Consejo Superior de la Judicatura, y que antes de la radicación en el Congreso, para su aprobación, se remita al Consejo Nacional de Planeación, con el objeto de que emita concepto y el Gobierno pueda valorarlo.

Igualmente, el artículo 339 C.P. prescribe que habrá planes de desarrollo de las entidades territoriales, los cuales estarán conformados por una parte estratégica y por un plan de inversiones de mediano y corto plazo. Estos planes se elaborarán y adoptarán por las entidades territoriales, de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.

Sobre la necesaria concertación y armonización entre la planeación nacional y la territorial, la Corte Constitucional ha establecido la supremacía de la primera, por la necesidad de unidad de acción y de propósitos que debe caracterizar el cumplimiento de las funciones públicas. Al respecto, en la Sentencia C-447 de 1997 señaló que *“se evidencia que el diseño y la organización de la gestión administrativa local no es totalmente libre, toda vez que se imponen los lineamientos político administrativos propios de una República unitaria (C.P. art. 1º) con autonomía de las entidades territoriales dentro de los límites de la Constitución y la Ley (C.P. art. 287), por lo cual se deja en manos de las autoridades nacionales la definición de la política económica general (C.P. art. 303 y 315)”*.

Con el fin de alcanzar los fines constitucionales de la Región Metropolitana a través del principio de planeación y en virtud de la autonomía de las entidades territoriales asociadas, la propuesta contempla entre las funciones del Consejo Regional la adopción del Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional, como instrumento de planeación de mediano y largo plazo con visión regional y metropolitana integrada, que permitirá definir criterios y objetivos comunes, e implementar un sistema de coordinación, direccionamiento y programación del desarrollo regional sostenible en su jurisdicción.

Como herramienta idónea para el desarrollo, la regulación propuesta contempla dos grandes componentes para el plan: uno de planeación socioeconómica y otro de ordenamiento físico - espacial. Y estará acompañado de un Plan de Inversiones e incluirá los programas de ejecución.

A fin de lograr la necesaria armonización dentro del Sistema Nacional de Planeación, la propuesta dispone que ese plan guardará consonancia con las directrices sectoriales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y establece que el plan constituirá una norma de superior jerarquía; por lo tanto, sin perjuicio de su autonomía territorial, los municipios deberán armonizar sus planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, planes sectoriales y demás instrumentos de planificación, a lo dispuesto por el Plan Director.

Además, el Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional establecerá el marco general para la formulación de los planes previstos en cada una de las áreas temáticas y los demás que determine el Consejo Regional.

4.11. Estructura administrativa y sistema de toma de decisiones

En atención a que el párrafo transitorio 2.º del Acto Legislativo N.º 02 de 2020 dispone que la ley orgánica establecerá *“la estructura administrativa del Consejo Regional”*, la propuesta contempla como estructura para ejercer sus competencias y funciones la siguiente:

1. Consejo Regional
2. Director de la Región Metropolitana
3. Secretaría Técnica, a cargo del director
4. Consejo Regional de Seguridad, Convivencia y Justicia
5. Comités sectoriales y/o temáticos
6. Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales
7. Agencias especializadas y otras entidades
8. Agencia Regional de Movilidad
9. Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y Comercialización

Se reitera que el Consejo Regional será el máximo órgano de gobierno de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca y estará conformado por el Alcalde Mayor de Bogotá, los Alcaldes de los municipios de Cundinamarca que se asocien y el Gobernador de Cundinamarca, como lo estableció el Acto Legislativo N.º 02 de 2020.

Así mismo, el proyecto propone que el ministro del Interior o su delegado participe de manera permanente en el Consejo Regional con voz y voto. Así mismo, el Gobierno Nacional designará sus delegados con voz y voto en la Agencia Regional de Movilidad y en la Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y Comercialización. Adicionalmente, más adelante en la regulación (numeral 3.º del artículo 18), se precisa que el delegado del gobierno nacional no se contabilizará para la determinación del cuórum.

Esta participación del Gobierno Nacional en la Región Metropolitana se sustenta en el principio constitucional de Estado unitario. Por ejemplo, en el caso de las regiones metropolitanas, en la sentencia C-072 de 2014, la Corte Constitucional estableció que la participación de un delegado del gobierno nacional en un órgano de gobierno de carácter

local, en sí misma considerada y siempre que este no afecte en modo alguno el discurrir de la Junta, resulta expresión del artículo 288 de la Constitución, el cual procura el ejercicio de las competencias de los entes territoriales, en un marco de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con la Nación:

“Se reitera que la interacción entre autoridades nacionales y locales, evitando que las primeras tengan injerencia indebida en la autogestión de los intereses de las segundas, es el estado ideal del equilibrio entre los principios del Estado unitario y la Autonomía Territorial. Por esto, como lo ha señalado la jurisprudencia, la naturaleza del Estado unitario presupone tanto la centralización política y exige unidad en todos los ramos de la legislación; exigencia que se traduce en la existencia de parámetros uniformes del orden nacional y de unas competencias subordinadas a la ley en el nivel territorial, así como también supone la existencia de competencias centralizadas para la formulación de decisiones de política que tengan vigencia para todo el territorio nacional. De lo que no puede sino concluirse, que participación de un delegado del gobierno nacional en la Junta Metropolitana con voz pero sin voto, no solo no es contraria al principio de autonomía de los municipios, sino que es una herramienta poderosa para implementar en la práctica la idea de la Constitución de 1991 según la cual, un Estado unitario pretende a la vez ser descentralizado y respetar la Autonomía Territorial en coordinación con las políticas nacionales.

(...)

36.- La Corte Constitucional, de un lado encontró ajustado a los principios constitucionales de los que se deriva el principio de autonomía territorial, la pertenencia del representante del gobierno nacional a la Junta Metropolitana cuando participa en las decisiones de este órgano, en tanto la norma le otorga voz pero no voto. Pero de otro lado, encontró contrario a los mismos principios su contabilización para la determinación del quórum para citar sesiones extraordinarias y para sesionar válidamente, por lo que entonces deberá declarar la exequibilidad condicionada de la disposición acusada”.

Por otro lado, con el fin de garantizar la coherencia y coordinación en las decisiones y políticas para la Región Metropolitana, se prevé que el Consejo Regional actuará como junta directiva de las agencias de la Región Metropolitana y, si lo considera, podrá conformar comités técnicos asesores.

En concordancia con lo anterior, se propone que el Consejo Regional se reunirá en sesiones ordinarias al menos una vez cada dos meses o de manera extraordinaria cuando lo soliciten el presidente del Consejo Regional o en su ausencia el vicepresidente, el Director de la Región Metropolitana, o la tercera parte de sus miembros.

Las decisiones del Consejo Regional se adoptarán por medio de los acuerdos regionales metropolitanos, los cuales pueden tener origen en los miembros del Consejo Regional, el Director de la Región Metropolitana o la tercera parte de los miembros de las corporaciones de los entes territoriales que la integran. Igualmente, de conformidad con el artículo 155 de la Constitución Política, se prevé expresamente que también podrán tener origen en la iniciativa popular.

Además, en algunas materias se reserva su iniciativa al Director de la Región Metropolitana, en virtud del principio de eficiencia y la responsabilidad que le asiste a este en la ejecución y gestión de estos asuntos. Así, los proyectos de acuerdo del Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional, los planes de inversión, presupuesto anual de rentas y gastos, estructura administrativa y planta de cargos, deberán ser presentados por el Director al Consejo Regional, para su aprobación. Lo anterior no se opone, por supuesto, a que el Consejo Regional participe e intervenga en el proceso de análisis y aprobación que todo

proyecto de acuerdo deberá seguir para ser válidamente incorporado al ordenamiento jurídico de la Región Metropolitana.

Además, se establecen las funciones básicas del Consejo Regional que son necesarias para el funcionamiento de la Región Metropolitana, permitiendo que se le puedan asignar otras bien sea por la ley o por delegación.

En cuanto al sistema de toma de decisiones se establece que el Consejo Regional tomará sus decisiones de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Se promoverá el consenso, tal como lo establece el Acto Legislativo 02 de 2020.
2. En las decisiones sobre el nombramiento y retiro del Director, y los gastos y las inversiones de la Región Metropolitana, se requerirá la aceptación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, según lo contemplado en el Acto Legislativo N.º 02 de 2020.
3. El quórum deliberatorio se constituye con una cuarta parte de los miembros del Consejo Regional y el quórum decisorio con las tres cuartas partes de los miembros del Consejo Regional. Como se mencionó anteriormente, el delegado del gobierno nacional no se contabilizará para la determinación del quórum.
4. Las decisiones referentes a cada área temática se tomarán por los municipios que integren su respectivo ámbito geográfico.

Adicionalmente, más adelante en la normativa, se prevé que el Director de la Región Metropolitana asistirá a las sesiones del Consejo Regional, con voz pero sin voto.

En caso de no existir consenso en la primera votación, se proponen los siguientes pasos:

1. Se utilizará la moción de insistencia hasta por tres veces.
2. Se conformará una subcomisión que presentará un informe al Consejo Regional para la insistencia.
3. Se toma la decisión por mayoría absoluta, y en todo caso, la decisión deberá contar con el voto favorable de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.

Adicionalmente, se establece que cuando una decisión afecte directamente a uno o varios municipios o al Distrito Capital, el Consejo Regional establecerá, en el acuerdo que adopta la decisión, las medidas que compensen y mitiguen los impactos generados, las cuales serán concertadas con el respectivo municipio previo a la aprobación de la decisión.

Finalmente, se faculta al Consejo Regional para que defina en su estatuto el procedimiento para la aplicación de lo establecido anteriormente.

En relación con el Director de la Región Metropolitana se determina que es empleado público de libre nombramiento y remoción, será representante legal de la Región Metropolitana y su elección corresponderá al Consejo Regional, previo proceso de convocatoria pública, el cual será reglamentado por el Consejo Regional.

Esta propuesta se fundamenta en el modelo de reforma gerencial que se ha promovido a través del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), constituido

en 1972 y conformado actualmente por 23 países miembros³⁷, entre ellos Colombia. Su creación fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2845 – XXVI, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social.

Las directrices de este organismo se han desarrollado a partir de varios documentos, entre ellos: *“Una nueva gestión pública para América Latina”* (1998), *“Carta Iberoamericana de la Función Pública”* (2003), *“Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico”* (2007), *“Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública”* (2008), *“Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública”* (2013) y, más recientemente, *“Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública”* (2020).

Dentro de la política de lucha contra la corrupción, Colombia ha reconocido y desarrollado los compromisos adquiridos en 2003 con la *“Carta iberoamericana de la función pública”* (CIFP), como lo hizo con la expedición y reglamentación de la Ley 909 de 2004³⁸, la cual sirvió de insumo directo para dicha ley, no solo para renovar y desarrollar la carrera administrativa³⁹, sino especialmente para la reforma y modernización del nivel gerencial.

En particular, la CIFP, como continuación del documento *“Una nueva gestión pública para América Latina”*, propuso un mayor alcance a la reforma gerencial, que se debe dar desde la reorganización de los recursos humanos. Trazó entre otros objetivos a implementar en toda la región: restaurar la confianza de los ciudadanos en la administración pública, la eficacia gubernamental, la lucha contra la corrupción, y la capacidad de crecimiento económico sustentable de los estados latinoamericanos. En cuanto a la función directiva y los empleos gerenciales, la CIFP establece que las regulaciones deben incluir: *“Reglas de acceso al cargo que garanticen la profesionalidad mediante la utilización de criterios de capacidad y mérito, haciendo asimismo posible el nivel de confianza requerido en cada caso por la naturaleza de la función”*⁴⁰.

Estos compromisos internacionales, así como las declaraciones y demás instrumentos del CLAD, orientan la gestión pública que ha desarrollado el país y por tal razón se propone implementar la convocatoria pública del cargo de Director de la Región Metropolitana.

³⁷ En orden de ingreso, los miembros actuales del CLAD son: México, Perú y Venezuela desde 1972; República Dominicana en 1973; Chile en 1974; Bolivia en 1975; Argentina, Colombia y Ecuador en 1976; Honduras en 1978; Guatemala, Panamá, Nicaragua y Costa Rica en 1979; España en 1982; Uruguay en 1987; Brasil en 1990; Cuba en 1991; El Salvador y Paraguay en 1992; Portugal en 1999; Andorra en 2018 y Angola en 2020.

³⁸ 31. Grillo, F. (2005). *Incidencia de la Carta Iberoamericana de la Función Pública en el Desarrollo de la Ley 909 de 2004*. Foro Iberoamericano: Revitalización de la Administración Pública. Estrategias para la Implantación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. México D.F: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.

³⁹ Como lo hace expresamente la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otros, en el Acuerdo N.º 138 del 14 de enero de 2010, mediante el cual se establecieron criterios técnicos y legales que fundamentan el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera, y en el que en su parte considerativa expresó: *“Que la Carta Iberoamericana de la Función Pública de 2003, ratificada por Colombia, indica los principios rectores de todo sistema de función pública”*.

⁴⁰ Epígrafe 56 del *“Capítulo Quinto. Consideraciones Específicas sobre la Función Directiva”* de la CIFP (2003).

La especial relevancia e importancia de este cargo se resalta en la propuesta en el sentido que, además de presidir los consejos o juntas directivas de las agencias y entidades adscritas o vinculadas a la Región Metropolitana, también ejercerá la Secretaría Técnica y, en tal virtud, se encargará de planear, organizar, dirigir y controlar los trámites necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones del Consejo Regional; preparar los proyectos de Acuerdo, incluyendo los estudios técnicos que se le soliciten y aquellos necesarios para soportar la toma de decisiones, y proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana requerida para el funcionamiento del Consejo Regional, así como convocar a sus miembros. Asimismo, tendrá a su cargo la relatoría y elaboración de actas de las sesiones del Consejo Regional. Adicionalmente, se faculta al Consejo Regional para definir las demás funciones de la Secretaría Técnica.

Si bien el Acto Legislativo N.º 02 de 2020 enunció las anteriores dependencias de la Región Metropolitana, de su lectura sistemática y, en particular, de su parágrafo transitorio 2.º del artículo 1.º, que establece que por medio la ley orgánica se definirá el funcionamiento de la Región Metropolitana y establecerá la estructura administrativa del Consejo Regional, se desprende que el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración, puede determinar con mayor o menor detalle los elementos de la estructura interna de esta entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial. Sobre la libertad de configuración del legislador para fijar la estructura del Estado, la Corte Constitucional ha precisado que para el caso de las entidades descentralizadas, el legislador puede establecer su estructura con mayor o menor detalle, por supuesto, sin llegar al punto de suprimir la autonomía que tienen estas entidades para organizarse:

“El acto de creación de las entidades descentralizadas debe asignar a la entidad sus objetivos y estructura orgánica, los que deben estar en consonancia con las finalidades propias del Estado y servir a su cabal realización. iv) El Legislador ordinario o extraordinario en ejercicio de su potestad de configuración al establecer la estructura orgánica de las entidades descentralizadas que cree, puede hacerlo con mayor o menor detalle, pero lógicamente sin que su actuación pueda vaciar de contenido la autonomía que en esta materia se predica de las entidades descentralizadas para auto organizarse y para adecuar su funcionamiento a las finalidades establecidas en la ley para cada una de ellas”⁴¹.

Como ejemplo de lo anterior, la Ley 1625 de 2013, orgánica de las áreas metropolitanas, en su artículo 26 dispone que en cada Área Metropolitana deberá existir, por lo menos, el Consejo Metropolitano de Planificación.

En consecuencia, y partiendo de la novedad de la figura constitucional de la Región Metropolitana, la propuesta incluye la creación y definición de algunas áreas, consejos o dependencias que se consideran necesarias para cumplir los fines y propósitos de la entidad, en particular, respecto de la gestión de determinados asuntos, situaciones y fenómenos que revisten especial importancia y requieren ser gestionados a nivel de la región metropolitana. De esta manera, se establece la estructura con algún grado de detalle, con lo cual se respeta la autonomía de las entidades territoriales que se asocien a la Región Metropolitana.

⁴¹ Corte Constitucional, sentencia C-784 de 2004. Reiterada en las Sentencias C-098 de 2013 y C-031 de 2017.

Así, para la coordinación y complementariedad de las acciones en materia de Seguridad, Convivencia y Justicia, se propone que la Región Metropolitana conforme un Consejo Regional de Seguridad, Convivencia y Justicia. Este Consejo buscará la coordinación y complementariedad de las acciones en materia de Seguridad, Convivencia y Justicia entre los municipios, el Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca para optimizar recursos, aumentar la cobertura y con ésta, la coordinación de operatividad y resultados. Para lo anterior, se basará en las indicaciones normativas del Decreto 1284 del 31 de julio de 2017, que enuncia cinco tipos de espacios, entre ellos los Consejos Regionales.

El Consejo de Seguridad y Convivencia Regional estará conformado por el Gobernador de Cundinamarca, el alcalde de Bogotá, los alcaldes que hagan parte de la región metropolitana; Comandantes de los Departamentos y Unidades Metropolitanas de la Policía Nacional, que tienen jurisdicción en las entidades territoriales; el Comandante de Brigada y/o Unidad de las Fuerzas Militares con jurisdicción en las entidades territoriales.; los directores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); los directores regionales del Instituto Nacional de Medicina Legal, los directores seccionales de la Fiscalía General de la Nación y los secretarios de Gobierno o Seguridad de los entes territoriales que hacen parte de la Región.

Igualmente, en armonía con lo anterior, se faculta al Consejo Regional para que conforme comités sectoriales o temáticos, de carácter consultivo, en los temas que se consideren necesarios de acuerdo con los hechos metropolitanos definidos y las competencias que ejerza. Con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, se prevé que estén integrados por la alta dirección de las entidades asociadas a la Región Metropolitana y que tienen a su cargo estos asuntos. A las reuniones de estos comités se podrá invitar a representantes del sector público o privado, que estén en capacidad de aportar a los asuntos que se estudien.

Como instancia que contribuya técnicamente a la toma de decisiones, se propone que la Región cuente con un Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales, el cual deberá compilar, generar, georreferenciar, analizar información técnica sobre la Región y hacer seguimiento y evaluación a las dinámicas económicas, sociales, territoriales y ambientales, así como al Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional. La conformación, organización y funciones del Observatorio serán definidas en el Estatuto que apruebe el Consejo Regional.

Actualmente, existe un Observatorio de Dinámicas Urbanas y Regionales, ODUR, que cuenta con una información y una estructura básica en la Secretaría de Planeación Distrital⁴² y una Infraestructura de Datos Espaciales Regionales, IDER, que opera en la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, ambas producto de un proyecto financiado por el Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General de Regalías. Igualmente, la Secretaría de Integración Regional de Cundinamarca, dispone de un acervo de información importante que permitirá fortalecer este soporte técnico, con el fin de garantizar que la Región Metropolitana consolide, analice, localice y proyecte el desarrollo futuro con la mejor, más pertinente y más actualizada información posible que le permita tomar las mejores decisiones, en cumplimiento de sus funciones y competencias.

De otro lado, dadas las evidentes interdependencias en transporte entre el Distrito Capital y los municipios del Departamento de Cundinamarca, que se explicaron ampliamente en los

⁴² Resolución 1865 de 2019, por la cual se institucionaliza el ODUR- Observatorio de Dinámicas Urbanas y Regionales.

antecedentes, y ante el hecho de que las competencias en transporte público están atomizadas en diversas entidades y agentes. Por un lado, hay entidades que ejercen como autoridad de transporte para la planeación estratégica, la adopción de tarifas, la entrega de habilitaciones y permisos, el control y vigilancia, y la definición de parámetros operacionales para algunas modalidades, tales como el Ministerio del Transporte, el Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca y los municipios, según el tema. Por el otro, existen entes gestores como Transmilenio, la Empresa Metro y la Empresa Férrea Regional, que adelantan la planeación y gestión integral de la operación y, finalmente, se encuentran los operadores o empresas de transporte público encargadas de la prestación del servicio de acuerdo con las condiciones establecidas en la licitación o en el permiso de operación.

Este entramado institucional hace necesaria la creación de una Agencia Regional de Movilidad, como entidad pública adscrita a la Región Metropolitana, encargada de la planeación y gestión de la movilidad y el transporte a nivel regional.

A través de ella, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca ejercerá la autoridad Regional de Transporte. Esta entidad estará a cargo del Sistema de Movilidad Regional, el cual está integrado por el conjunto de infraestructuras y servicios de transporte público y privado de carácter regional que conectan las personas y mercancías entre los municipios del ámbito geográfico de la movilidad, así como los demás elementos requeridos para su organización, planeación, gestión, regulación, financiación y operación.

En materia de transporte público de pasajeros terrestre y férreo, la Agencia Regional de Movilidad, sin que medie requisito adicional, estará a cargo y ejercerá como autoridad de transporte de todas las modalidades de transporte público de pasajeros que conecten a los municipios del ámbito geográfico de la movilidad, en las rutas intermunicipales que tengan origen -destino en los municipios que conforman dicho ámbito geográfico, exceptuando la modalidad de transporte público especial de pasajeros.

Los servicios de transporte público de pasajeros en cualquier modalidad con origen y destino en una sola jurisdicción distrital o municipal, dentro del ámbito geográfico de la movilidad, incluyendo el transporte por cable, serán considerados radio de acción distrital o municipal y su autoridad de transporte será ejercida por el respectivo alcalde distrital o municipal, quienes podrán ceder su autoridad a la Agencia Regional de Movilidad.

Con el propósito de facilitar el pronto inicio de las operaciones y funciones para el mejoramiento de la movilidad en la Región, mientras se organiza la Agencia Regional de Movilidad, la Región Metropolitana podrá realizar el traslado de sus funciones a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá para que actúe transitoriamente como autoridad regional de transporte, hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta que el Consejo Regional decida extender ese plazo. El proyecto establece que cuando la Secretaría Distrital de Movilidad actúe como autoridad regional de transporte, el Consejo Regional actuará como junta directiva para la consulta y aprobación de sus decisiones.

También como medida transitoria y teniendo en cuenta que el Regiotram de Occidente es un sistema concesionado regional previo que aún no ha entrado en fase de operación, la definición tarifaria, frecuencia y operación del mismo será establecida por la Gobernación de Cundinamarca, de la misma manera que la definición tarifaria y operacional de la concesión de la primera fase de la primera línea del metro de Bogotá sigue a cargo de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En todo caso, la Gobernación de Cundinamarca acordará con el Consejo Regional la integración del Regiotram de Occidente a la Agencia Regional de Movilidad a más tardar en diciembre de 2025, al igual que la Alcaldía Mayor de Bogotá acordará en ese mismo plazo la integración de la primera fase de la primera línea del metro.

Igualmente, con el mismo fin de garantizar la celeridad y eficacia en el componente de seguridad alimentaria y comercialización en el territorio de su jurisdicción, el proyecto propone que la Región Metropolitana podrá transferir sus funciones a la Agencia de Comercialización e Innovación del Departamento de Cundinamarca para que actúe transitoriamente como Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y Comercialización, hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta la fecha en que el Consejo Regional decida extender ese plazo.

Cuando la Agencia de Comercialización e Innovación del Departamento de Cundinamarca actúe transitoriamente como Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y Comercialización, el Consejo Regional actuará como junta directiva para la consulta y aprobación de sus decisiones.

En armonía con lo anterior y el principio de autonomía de las entidades asociadas, se faculta al Consejo Regional para que defina la estructura administrativa de la Región Metropolitana, así como para que cree las agencias estatales de naturaleza especial, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, que considere necesarias para el cumplimiento de sus competencias y funciones. Para efectos legales estas serán consideradas del sector descentralizado, de la rama ejecutiva, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, de carácter regional sometidas al régimen jurídico de este tipo de entidades del orden nacional.

Relacionado con lo anterior, y en aras de cumplir con los principios de la función administrativa de eficacia, economía y eficiencia (artículos 209 C.P. y artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011), la propuesta posibilita (artículo 24) que la Región pueda decidir que cumplirá sus funciones a través de entidades públicas o mixtas pertenecientes al nivel departamental, distrital o municipal de alguna de las entidades territoriales que la integran.

4.12. Patrimonio y mecanismos de financiación

En cumplimiento de lo previsto en el Acto Legislativo N.º 02 de 2020, el proyecto contempla los mecanismos de financiación de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, no solo para garantizar su funcionamiento, sino su sostenibilidad y, especialmente, su mayor capacidad de gestión en el corto plazo de los planes, programas y proyectos relacionados con los hechos metropolitanos que se identificaron como prioritarios en la propuesta normativa. Así, en primer lugar, se establecen los diferentes elementos y conceptos que constituirán el patrimonio y rentas de la RMBC.

Entre estos estos mecanismos de financiación de la Región Metropolitana, y en desarrollo del principio de colaboración armónica entre las autoridades para el cumplimiento de los fines del Estado (artículo 113 C.P.), se propone como mecanismo de cofinanciación que el Gobierno Nacional podrá financiar o cofinanciar el mejoramiento y la optimización de la infraestructura de accesos urbanos del ámbito del área temática de la movilidad.

También en relación con este componente de movilidad, por una parte, se propone que una vez entre en funcionamiento la Autoridad Regional de Transporte, la habilitación de las terminales de transporte y los Centros de Integración Modal para el transporte público de pasajeros, así como la definición del precio público por su acceso y uso será potestad exclusiva de esta entidad dentro de su ámbito geográfico, de acuerdo con los parámetros fijados en el proyecto de ley. Se prevé que las terminales de transporte y los Centros de Integración Modal se podrán financiar con los recursos provenientes del cobro del precio público por el uso y acceso a la infraestructura de transporte y de los recursos provenientes de cobros por servicios conexos y complementarios que se ofrezcan.

Por otra parte, en cuanto al desarrollo de nuevos aeropuertos dentro del ámbito geográfico de la Región Metropolitana, se propone que la prestación aeroportuaria de que trata el artículo 151 de la Ley 2010 de 2019⁴³, se distribuirá entre la Región Metropolitana, que percibirá el 30% de los recursos, y los municipios donde se instale la concesión aeroportuaria, quienes recibirán el 70% restante.

Adicionalmente, se autoriza que los municipios y el Distrito Capital que conformen la RMBC adopten a través de sus concejos municipales y distrital una sobretasa al impuesto de delineación urbana equivalente como máximo al 1% de la tasa impositiva o del valor total de la obra, que será transferido a la Región Metropolitana. Sus elementos tributarios corresponderán a los del impuesto de delineación urbana que para tal efecto haya reglamentado cada una de estas autoridades. Adicionalmente, se prevé que esta participación podrá suplir los aportes de que trata el literal c) del artículo 28 sobre patrimonio y rentas de la RMBC.

El proyecto establece, además, que la Región Metropolitana será titular del derecho a participar en la plusvalía que generen las acciones urbanísticas de carácter regional que esta desarrolle, así como la ejecución de obras públicas que adelante cualquier entidad pública en su jurisdicción territorial. La Región Metropolitana será, igualmente, titular de la contribución por valorización que genere la ejecución de obras públicas que adelante cualquier entidad pública del orden nacional o de escala regional en su jurisdicción territorial.

⁴³ Dispone la Ley 2010 de 2019: **“ARTÍCULO 151. CONTRAPRESTACIONES AEROPORTUARIAS.** *En los contratos de concesión o de Asociación Público Privada, suscritos o que se suscriban que tengan por objeto la construcción, mejoramiento o rehabilitación y/o la operación de uno o varios aeropuertos de propiedad de entidades del orden nacional, en los que se establezca una contraprestación a favor del concedente, el 20% del total de la contraprestación se trasladará a los municipios y/o distritos en los que se encuentren ubicados los correspondientes aeropuertos objeto de la concesión; en el caso que una concesión incluya varios aeropuertos, los recursos se distribuirán entre los municipios donde operan, de acuerdo a su participación en el total de pasajeros movilizados por la concesión. Estos recursos se priorizarán por la entidad territorial correspondiente, a la construcción y/o mejoramiento de las vías de acceso al aeropuerto correspondiente. Del 80% restante de la contraprestación a trasladarse se descontará la contraprestación establecida en el artículo 308 la Ley 1955 de 2019, para gastos de funcionamiento de la Unidad Especial de Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura, o las entidades que hagan sus veces”.* Actualmente este artículo se encuentra suspendido hasta el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 15 del Decreto Legislativo 482 de 2020, “por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica”.

En cuanto a los proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, de que trata el artículo 33 de la Ley 2056 de 2020 y que tengan relación con la jurisdicción y competencias de la RMBC, serán presentados por esta al respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional, previa autorización del Consejo Regional y podrá ser designada como ejecutora, sin afectar la potestad de los entes territoriales de presentar proyectos.

4.13. Control político, participación ciudadana y transparencia y acceso a la información

El control político de las decisiones de la Región Metropolitana se ejercerá en la forma establecida en el numeral 8º del párrafo transitorio segundo del artículo 325 de la Constitución Política de 1991. En ejercicio de este poder las autoridades encargadas podrán hacer uso de los mecanismos de control político establecidos en la ley, únicamente para asuntos propios de su jurisdicción y que tengan relevancia regional.

El proyecto propone que el ejercicio del control político por parte de los Concejos Municipales que hagan parte de la Región Metropolitana se realizará en una o más sesiones semestrales en la cual una comisión de tres diputados de la Asamblea de Cundinamarca, cinco delegados del Concejo Distrital de Bogotá y de un delegado de cada Concejo tendrán derecho de presentar las observaciones y formular preguntas al director de la Región Metropolitana, directores y gerentes de las agencias metropolitanas. La asistencia a estas sesiones por parte de los servidores de la administración metropolitana será indelegable.

Con el fin de dar transparencia a su actuación y mantener informada a la ciudadanía, la propuesta de ley orgánica contempla los principales medios que debe adoptar la Región Metropolitana, entre ellos, el director de la Región Metropolitana deberá presentar anualmente de manera separada, a cada una de las corporaciones públicas de los entes territoriales que hagan parte de la Región un informe de gestión de las actividades realizadas.

El proyecto contempla que la respectiva corporación pública también podrá solicitar informaciones por escrito al Director de la Región Metropolitana, directores o gerentes de sus agencias y autoridades, convocándolos para que en sesión especial rindan declaraciones sobre hechos relacionados con los asuntos que sean objeto de estudio. Ante la renuencia o negativa de las autoridades de atender las citaciones sin excusa justificada o rendir los informes solicitados, se dará lugar a la imposición de las sanciones a que haya lugar, previstas en la ley.

Las corporaciones públicas podrán integrar una subcomisión de integración regional, conformada por los delegados que cada ente establezca, con el fin de hacer seguimiento a la gestión desarrollada por el Consejo Regional y Director de la Región Metropolitana, directores o gerentes de sus agencias y autoridades.

Por otro lado, teniendo en cuenta que, conforme al artículo 2.º del Estatuto Fundamental, uno de los fines esenciales del Estado es el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural, se propone como instancia de participación ciudadana el Ágora Metropolitana. Será un espacio

virtual y presencial de encuentro, deliberación y concertación para plantear, co-crear y priorizar iniciativas y propuestas que incidan en la construcción, seguimiento y evaluación de las políticas, programas, planes y proyectos de la Región Metropolitana en torno a las áreas temáticas y los hechos metropolitanos declarados. En el Ágora, se garantizará el acceso a la información y promoverá, la deliberación, la innovación social, la colaboración, la formación y facilitará el control social y ciudadano.

La propuesta de crear un Ágora Metropolitana surge a partir del Acto Legislativo 02 de 2020, pero también por la necesidad de crear una instancia de participación ciudadana que permita que los habitantes de los entes territoriales asociados a la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca puedan incidir e involucrarse en las políticas, proyectos, programas y proyectos desde su diseño y construcción, así como en su seguimiento y evaluación. Esta instancia de participación surge a partir de las propuestas ciudadanas que se presentaron en los espacios de participación que se han dado para la construcción de este proyecto de ley, en las propuestas recibidas a través de medios digitales creados para tal fin, y de facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones que la afectan.

A partir de la Constitución Política de 1991, la ciudadanía tiene el derecho de participar de manera activa en la consulta, control y vigilancia de las decisiones que la puedan afectar positiva o negativamente. Este derecho, además, permitió la creación de distintos mecanismos, instancias y espacios para que la población colombiana pudiera incidir de manera activa en el ámbito público y en lo que respecta a su cotidianidad por medio de escenarios de deliberación, concertación y coexistencia con las instituciones del Estado. Es deber del Estado promover y garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político, así como también facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan mediante la promoción misma de la participación ciudadana. Es así como la Ley 134 de 1994, y posteriormente la Ley 1757 de 2015, fueron promulgadas para promover, proteger y garantizar la participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida de los colombianos a través de distintos mecanismos e instancias, así como de la posibilidad de ejercer control social y vigilancia al ejercicio del poder político en el Estado.

Recogiendo la definición de la Corte Constitucional en su Sentencia C-150 de 2015, se entiende que *“la participación como derecho de los ciudadanos y eje medular del ordenamiento constitucional vigente implica”, entre otras, “el deber de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que, al mismo tiempo, eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección alcanzados”*. Estos como deberes del Estado que se concretan en deberes más específicos a los que la Corte se refiere tales como: *“promover formas de participación democrática que comprendan no solo la intervención de partidos o movimientos políticos sino también de organizaciones sociales de diferente naturaleza; y promover estructuras democráticas en las diferentes formas de organización social”*. Asimismo, sobre las formas de participación, la Corte advierte que *“las anteriores formas de participación no agotan las posibilidades existentes en esta materia. En efecto, en atención al carácter expansivo de la democracia y a la condición de mandato de optimización del principio de participación, es posible identificar y desarrollar otros instrumentos que hagan realidad el compromiso constitucional de promover, en la mayor medida posible, la incidencia de los ciudadanos en las decisiones que los afectan”*.

Dentro de las diferentes experiencias internacionales que se pueden tomar como referencia de escenarios de participación ciudadana se encuentra que en el Gran Montreal de Canadá funciona un Ágora Metropolitana como espacio de participación de los habitantes de esa área metropolitana. Este es un gran foro público que reúne a representantes de la población, entre elegidos y ciudadanos, y tiene lugar cada dos años en un evento de varios días, siendo este uno de los principales mecanismos de seguimiento del Plan Metropolitano de Ordenamiento y Desarrollo y en el que concejales, alcaldes, ciudadanos, académicos y expertos del Gran Montreal hacen un balance de la implementación del Plan y proponen recomendaciones para el futuro. Este espacio, que se convoca cada dos años, es el principal escenario de la ciudadanía para incidir en la planificación urbana.

Teniendo en cuenta que este modelo de participación es solo un ejemplo en términos de nuevas e innovadoras formas de participación de la ciudadanía, para la Región Metropolitana se propone la creación de un Ágora Metropolitana que promueva, proteja y garantice la participación de toda la ciudadanía, y que esta pueda aportar en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos de la Región Metropolitana que giren en torno a los temas y hechos metropolitanos, y participando de manera activa en el seguimiento y evaluación permanentes de las políticas públicas en materia de participación ciudadana.

El proyecto propone esta instancia para la promoción de la deliberación, la innovación social y la garantía del control social y vigilancia ciudadana. Será representativa y reflejará la diversidad de la población de la región, y tendrá como propósito constituirse en un espacio ciudadano de consulta, construcción, co-creación y veeduría a las decisiones del Consejo Regional, y con las herramientas necesarias para una participación incidente. Para que sea ampliamente representativa, debe ser conformada por representantes de la sociedad civil organizada y no organizada que tengan interés en deliberar, fiscalizar y proponer sobre lo que sea de competencia metropolitana.

En cuanto a la sociedad civil organizada, tendrá representación de los Consejo Territorial de Planeación, de las Instituciones Educativas, de las Organizaciones Sindicales, de las Juntas de Acción Comunal, de Organizaciones No Gubernamentales, de Veedurías Ciudadanas, de Gremios Económicos, de Asociaciones Campesinas, de Grupos Étnicos, de Asociaciones y Organizaciones de Mujeres, de la Comunidad LGBTQ, de la población con discapacidad, de los Consejos de Juventud y de las Juntas Administradoras Locales. Y para la sociedad civil no organizada se debe asegurar que puedan ejercer su derecho a la participación mediante un reglamento que será definido una vez se concrete la creación formal del Ágora Metropolitana.

Teniendo en cuenta lo que la Ley 1757 de 2015 en su artículo 3 sobre mecanismos de participación señala que “La participación de la sociedad civil se expresa a través de aquellas instancias y mecanismos que permiten su intervención en la conformación, ejercicio y control de los asuntos públicos. Pueden tener su origen en la oferta institucional o en la iniciativa ciudadana”, la creación de esta Ágora permitirá la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de la Región Metropolitana Bogotá -Cundinamarca, no solo como un espacio en el cual sea escuchada, sino como un escenario que posibilite su incidencia, acompañamiento, control, evaluación y seguimiento a los planes, programas, proyectos, políticas y a los debates que le afecten de una u otra manera en su cotidianidad.

En el proyecto se establece la obligación para el Consejo Regional de presentar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la sesión del Ágora Metropolitana, el informe de las



iniciativas propuestas que fueron incluidos en políticas, programas, planes y proyectos de la Región Metropolitana para su seguimiento y evaluación.

También se garantizará la disponibilidad de la información suficiente, pertinente y de calidad en concordancia con la Ley 1712 de 2014, a través de instrumentos virtuales y análogos, que facilite el control social y ciudadano en torno a los asuntos relacionados con la Región Metropolitana.

De otro lado, el proyecto de ley plantea adicionar un párrafo al artículo 26 de la Ley 99 de 1993 en el sentido de modificar la composición del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, reduciendo de dos a uno los representantes del sector privado y de dos a uno la participación de los representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro para permitir la participación del Director de la Región Metropolitana y del rector o su representante una universidad acreditada como de alta calidad de la región.

4.14. Derogatoria y vigencia

Dada la novedad de la figura constitucional de la Región Metropolitana, por coherencia y concordancia normativa, se precisa que la ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.